



## 2. Tensiones

- Durante 2021 se registraron 98 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (40) y Asia (24), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América Oriente Medio (11) y Europa (11).
- En 2021 se registraron cuatro golpes de Estado en África subsahariana que derrocaron a Gobiernos en Malí, Guinea, Sudán y Chad, siendo el año con el mayor número de golpes exitosos en la región desde 1999.
- La situación en Chad se deterioró como consecuencia de la muerte del presidente Idriss Déby y el golpe de Estado por parte de una junta militar suplantando al Gobierno vigente.
- Malí padeció su segundo golpe de Estado en menos de nueve meses que fue acogido de manera dispar en el interior y exterior del país.
- Las operaciones militares contra los grupos criminales en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, provocaron la expansión de sus actividades a los estados de Kaduna, Katsina, Níger y Sokoto por la presión de los cuerpos de seguridad.
- La tensión en torno al Sáhara Occidental se intensificó, provocando una treintena de fallecidos, y se agravó el histórico pulso entre Marruecos y Argelia.
- En Colombia, decenas de personas murieron en el marco de las protestas antigubernamentales que se iniciaron en abril.
- En Haití se incrementó la tensión por el asesinato del presidente y por el aumento de la actividad delincriminal de las bandas armadas que operan en el país.
- En Tailandia se registraron importantes movilizaciones a favor de una mayor democratización del país y de la reforma de la monarquía.
- Aunque se mantuvo la tensión, se produjeron acercamientos indirectos entre India y Pakistán, que se comprometieron a un cumplimiento más estricto del acuerdo de alto el fuego.
- La situación en torno a Nagorno-Karabaj continuó frágil, con frecuentes violaciones del alto el fuego de 2020 que puso fin a la guerra de seis semanas.
- La tensión en torno al programa nuclear iraní estuvo marcada por los obstáculos y el bloqueo en las negociaciones, diversos incidentes de seguridad y crecientes incumplimientos de Teherán respecto a lo establecido en el pacto de 2015.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2021. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2021. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2021.

### 2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2021

Tensión <sup>1</sup>	Tipología <sup>2</sup>	Actores principales	Intensidad <sup>3</sup>
			Evolución <sup>4</sup>
<b>ÁFRICA</b>			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerzas Armadas de Sudán, Sudán del Sur, RDC, RCA y Uganda, milicias comunitarias y grupos armados de los países de la región	1
	Recursos		=
Argelia <sup>5</sup>	Interno	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, grupos armados AQMI (ex GSPC), Jund al-Khilafa (filial ISIS)	2
	Gobierno, Sistema		=
Benín	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, sectores del Ejército	2
	Gobierno		↑
Chad	Interna	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Transformateurs), grupos armados chadianos (entre otros, FACT, CCMSR, UFR), grupo armado nigeriano Boko Haram, milicias comunitarias	3
	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad		↑
Costa de Marfil	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Djibouti	Interna	Gobierno, oposición política, grupo armado FRUD-armé	2
	Gobierno		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	1
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	1
	Territorio		↓
Eswatini	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Etiopía	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		↑
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno de Etiopía, gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF/OLA, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Etiopía – Egipto – Sudán	Internacional	Etiopía, Egipto, Sudán	2
	Recursos		↑
Etiopía – Sudán	Internacional	Etiopía, Sudán	2
	Recursos		↑
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2021 con la del año 2020 apareciendo el símbolo (↑) si la situación general durante 2021 es más grave que la del año anterior, (↓) si es mejor y (=) si no ha experimentado cambios significativos.
5. A partir de la edición 2022 del informe *Alerta!* la tensión denominada "Argelia" incluye también las actividades de grupos yihadistas (en particular de AQMI) que en el pasado se analizaban por separado.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
<b>ÁFRICA</b>			
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	3
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	2
	Gobierno		↓
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenia	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Malí	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional <sup>6</sup>	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Mozambique	Interna	Gobierno, RENAMO	1
	Gobierno, sistema		↓
Niger	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
Nigeria (Biafra)	Interna internacionalizada	Gobierno, IPOB, MASSOB, grupo armado ESN	3
	Identidad, Autogobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno liderado por Cap pour le Changement (coalición liderada por Félix Tshisekedi), en coalición con el Front Commun pour le Congo (coalición liderada por Joseph Kabila, sucesora de la Alianza por la Mayoría Presidencial), oposición política y social, grupos armados del este del país	2
	Gobierno		↑
RDC – Ruanda	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Ruanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Ruanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado ruandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora ruandesa en otros países de África y en Occidente	2
	Gobierno, Identidad		=
Ruanda - Burundi	Internacional	Gobierno de Ruanda, Gobierno de Burundi, grupos armados	2
	Gobierno		↓
Ruanda - Uganda	Internacional	Gobierno de Ruanda, Gobierno de Uganda	2
	Gobierno		↓
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	1
	Autogobierno		↑
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	2
	Territorio		=

6. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
<b>ÁFRICA</b>			
<b>Sudán</b>	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		=
Tanzania	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	2
	Interna		↓
<b>Túnez</b>	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	2
	Gobierno, Sistema		↑
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
<b>AMÉRICA</b>			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Chile	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
<b>Colombia</b>	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Cuba	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno		↓
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		↓
<b>Haití</b>	Interna	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas	3
	Gobierno		↑
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno		↓
<b>México</b>	Interna	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición	3
	Gobierno, Recursos		=
Nicaragua	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
<b>Perú</b>	Interna	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	2
	Gobierno, Recursos		=
<b>Venezuela</b>	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↓
<b>ASIA</b>			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	1
	Gobierno		↑

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
<b>ASIA</b>			
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China (Hong Kong)	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
China – Japón	Internacional	China, Japón	1
	Territorio, Recursos		=
China – Taiwán	Internacional	China, Taiwán	1
	Territorio, Recursos, Sistema		=
<b>Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea<sup>7</sup></b>	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	2
	Gobierno		=
<b>Corea, RPD – Rep. de Corea</b>	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	2
	Sistema		=
India	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Sistema, Gobierno		↓
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(ICS), ADF, RNLF, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↑
<b>India – China</b>	Internacional	India, China	3
	Territorio		↓
<b>India – Pakistán</b>	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↓
Indonesia (Sulawesi)	Interna	Gobierno, grupo armado MIT	1
	Identidad, Sistema		=
<b>Indonesia (Papúa Occidental)</b>	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Kazajstán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Gobierno		↑
<b>Kirguistán</b>	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	2
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Lao, RDP	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		=
Mar de la China Meridional	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei Darussalam	1
	Territorio, Recursos		=

7. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
<b>ASIA</b>			
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	2
	Gobierno, Sistema		=
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		↑
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		↑
<b>EUROPA</b>			
Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Belarús	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, EEUU, Rusia	2
	Gobierno		=
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía - Grecia, Chipre	internacional	Turquía, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Egipto, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia	2
	Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad		↓
España (Cataluña)	Interna	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, partidos políticos independentistas y no independentistas, actores de la sociedad civil, poder judicial	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Rusia (norte del Cáucaso)	Interna	Gobierno federal ruso, gobiernos de las república de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↓
Serbia – Kosovo	Internacional <sup>8</sup>	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		↑
<b>ORIENTE MEDIO</b>			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	1
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=

8. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
<b>ORIENTE MEDIO</b>			
<b>Irán</b>	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	1
	Autogobierno, Identidad		=
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	1
	Autogobierno, Identidad		=
<b>Irán – EEUU, Israel<sup>9</sup></b>	Internacional	Irán, EEUU, Israel	3
	Sistema, Gobierno		=
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
<b>Israel – Siria – Líbano</b>	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán, EEUU	3
	Sistema, Recursos, Territorio		=
<b>Líbano</b>	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham	2
	Gobierno, Sistema		↑
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.  
 ↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios.  
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

## 2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2021

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2021, tanto a nivel global como regional.

### 2.2.1. Tendencias globales

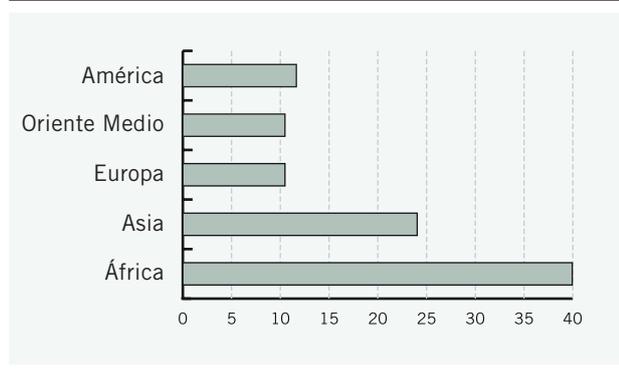
**Durante 2021 se identificaron 98 escenarios de tensión en todo el mundo, tres más que en 2020, confirmando la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años. En comparación con el año 2018, en 2021 se analizaron 15 casos más. África volvió a ser la región en la que se concentraron mayor número de tensiones (40), seguida de Asia (24), América (12) y Europa y Oriente Medio (11 en cada una).** Como en 2020, aunque el incremento de casos fue pequeño (uno en 2020 y tres en 2021), sí hubo una variación importante en cuanto a los casos considerados como tensión. Si en 2020 se identificaron siete nuevos (y dejaron de ser considerados como tales seis casos), en 2021 se analizaron nueve casos nuevos y otros seis dejaron de ser calificados como

***Durante 2021 se identificaron 98 escenarios de tensión, 40 en África, 24 en Asia, 12 en América Latina y 11 en Oriente Medio y en Europa***

tensiones. Seis de estos nueve casos se concentraron en África: Burkina Faso, Djibouti, Eswatini, Etiopía-Sudán, Níger y Nigeria (Biafra). Cabe destacar especialmente este último caso, donde el importante incremento de la tensión y la violencia entre el Estado nigeriano y la ESN, el nuevo brazo armado del movimiento independentista ilegalizado IPOB provocaron la muerte de decenas de personas y graves violaciones de los derechos humanos. En América Latina se incluyeron los casos de Cuba y Colombia por el notable incremento de las protestas en ambos países, con decenas de víctimas mortales en el caso de Colombia. Finalmente, también se catalogó como tensión el contencioso entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj, que en 2020 fue considerado como conflicto armado pero cuya intensidad durante 2021 se redujo ostensiblemente respecto de la escalada de la violencia que se vivió el año anterior. Por otra parte, hubo seis casos que dejaron de ser considerados escenarios de tensión por la reducción significativa de los niveles de violencia o movilizaciones –Madagascar, Malawi, Togo Sri Lanka o

9. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2021



bien por consideraciones metodológicas –Iraq, y Argelia (AQMI)–.<sup>10</sup>

La mitad de las tensiones fueron de **intensidad baja**, el 31% de **intensidad media** y el 19% de **alta intensidad**. En comparación con el año anterior, el número de casos de baja intensidad se redujo ligeramente (pasando del 57% al 50%), mientras los casos de intensidad media se incrementaron del 26% al 31%. **En 2021 se identificaron tres casos más de alta intensidad que en 2020, sumando un total de 19 contextos:** Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra), Sudán, Colombia, Haití, México, Venezuela, India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj), Irán-EEUU, Israel; e Israel-Siria-Líbano. Más de la mitad de las tensiones de mayor gravedad se concentraron en África. En **Chad**, además de la persistencia de enfrentamientos intercomunitarios en diversas partes del país, de las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad, y de la ofensiva rebelde del Frente para el Cambio y la Concordia en Chad en el centro y norte del país, tras la muerte del histórico presidente Idriss Déby (en el cargo desde 1990) se produjo un golpe de Estado militar y su hijo tomó el poder. En **Guinea**, el golpe de Estado que perpetró el coronel Mamy Doumbouya contra el Gobierno presidido por Alpha Condé provocó una condena unánime por parte de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y también desató una importante represión política en el país. En **Malí**, el deterioro de la situación de seguridad, la crisis en el gobierno de transición, y la dimisión del primer ministro a mediados de mayo dio lugar a un nuevo golpe de Estado –en agosto de 2020 se había producido otro– por parte del coronel Assimi Goïta, lo cual motivó la imposición de sanciones y el incremento de la tensión con países como Francia, que suspendió temporalmente sus operaciones militares conjuntas con las Fuerzas Armadas malienses. En **Nigeria**, además de la violencia que se vive en regiones como Biafra o el Delta del Níger, de la violencia intercomunitaria en el centro del país, o de las acciones armadas de Boko Haram en el norte del país y el Lago Chad, se incremen-

taron sustancialmente las operaciones militares contra grupos criminales en el noroeste del país, provocando dichos enfrentamientos la muerte de miles de personas. En el estado nigeriano de **Biafra** también se desencadenaron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y la recién creada Red de Seguridad del Este (ESN) ala militar de uno de los principales movimientos independentistas de Biafra, el IPOB, que persistieron de forma esporádica durante el año. Además, se incrementaron las violaciones de derechos humanos y la represión de las protestas y movilizaciones sociales, que aumentaron especialmente tras la detención en el extranjero y extradición a Nigeria del líder del IPOB.

**Etiopía** experimentó un grave deterioro de la situación por los recurrentes brotes de violencia intercomunitaria en diferentes partes del país, por la actividad armada del Ejército de Liberación Oromo (OLA) en la región de Oromiya y por las consecuencias en el conjunto del país de la guerra entre actores armados de la región de Tigré y el Gobierno federal, como por ejemplo el incremento de la violencia por parte de grupos de autodefensa y milicias contra población civil de la comunidad tigré y también de la comunidad amhara. En este sentido, la región de **Oromiya** también fue escenario de una escalada de la movilización social y protestas a favor y en contra del Gobierno, en las que se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad que causaron decenas de víctimas mortales. En paralelo, la violencia intercomunitaria y las acciones insurgentes por parte del OLA contra los cuerpos federales y contra la población civil de otros grupos étnicos del país presentes en la región, así como las acciones contrainsurgentes de los cuerpos de seguridad, podrían haber causado centenares de víctimas mortales. En **Kenia**, en un contexto de creciente polarización política entre los partidarios del presidente, Uhuru Kenyatta, y del líder opositor Raila Odinga, los ataques al Shabaab en el este y noreste del país y la violencia intercomunitaria en el centro de Kenia provocaron la muerte de cientos de personas. En Sudán, el golpe de Estado del mes octubre –precedido por otra tentativa fallida un mes antes–, provocó críticas y sanciones por parte de la comunidad internacional y dio lugar a movilizaciones sociales en todo el país que fueron reprimidas con dureza por parte de las nuevas autoridades. La disputa entre **Marruecos y el Sáhara Occidental** se agudizó por la persistencia de los enfrentamientos armados entre el Frente POLISARIO y las Fuerzas Armadas marroquíes, especialmente a lo largo de la barrera que separa el territorio saharauí controlado por Marruecos del que está bajo administración de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), así como por la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Argelia, que acusó a su país vecino de apoyar a grupos que reivindican la autodeterminación de la Kabylia y de llevar a cabo ataques aéreos y con drones en la zona fronteriza.

10. A partir de la presente edición del informe *Alerta!* las actividades de grupos yihadistas (en particular de AQMI) se incluyen en la tensión denominada “Argelia”. En cuanto a Iraq, algunas de las dinámicas que hasta esta edición se analizaban en el capítulo de Tensiones pasan a incluirse en el caso de Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

En **Haití**, la crisis política, institucional y social que vive el país desde hace años se vio agudizada tanto por el asesinato a mediados de año del presidente, Jovenel Moïse, como por el incremento sin precedentes en cuanto a la actividad de las bandas delincuenciales. En **Colombia**, varias decenas de personas murieron y miles de personas fueron heridas, desaparecidas o detenidas en el marco de las protestas antigubernamentales que se produjeron durante buena parte del año y que motivaron las críticas de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se produjo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía en la contención de las protestas. En **México**, que siguió siendo uno de los países del mundo con un mayor número de homicidios intencionales (más de 34.000), en 2021 varios cárteles de la droga consolidaron su posición y se incrementaron la violencia de corte político y los asesinatos contra determinados colectivos, como periodistas o personas defensoras de los derechos humanos. En **Venezuela**, además de los altos niveles de violencia (el país registró la segunda tasa de homicidios más alta de América Latina) y las numerosas denuncias nacionales e internacionales sobre vulneraciones de derechos humanos, persistieron tanto la polarización política entre el oficialismo y la oposición como la precaria situación económica y humanitaria (según ACNUR, Venezuela es el segundo país del mundo en el que más población se ha visto forzada a abandonar su hogar).

El contencioso entre **India y China** registró varios enfrentamientos armados directos en la región del Sikkim, ejercicios militares o despliegue de tropas adicionales en la frontera común o acusaciones cruzadas sobre el incumplimiento de los acuerdos alcanzados para desescalar la tensión y reducir la militarización en la región fronteriza de las zonas en disputa. En cuanto a la tensión histórica entre **India y Pakistán**, el número de incidentes en la Línea de Control se redujo sustancialmente después de que ambos países reafirmaran a principios de año su compromiso con el acuerdo de alto el fuego que habían suscrito en 2003, pero siguieron produciéndose acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad de Pakistán en los episodios de violencia que siguen registrándose en el estado indio de Jammu y Cachemira, así como sobre las detenciones de activistas cachemires por parte del Gobierno indio. En cuanto al conflicto entre **Armenia y Azerbaiyán** en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, que en 2020 vivió una importante escalada militar, en 2021 se produjeron numerosas violaciones del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2020 –con incidentes armados tanto en torno a la frontera entre Armenia y Azerbaiyán como en la línea de separación de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán– y la situación humanitaria era muy frágil, con decenas de miles de personas todavía desplazadas y en condiciones de retorno muy precarias. En la tensión

entre **Irán y EEUU e Israel**, a pesar de la reanudación de los cauces diplomáticos, se registraron numerosos incidentes de seguridad entre los mencionados países –como por ejemplo ataques navales, acciones de sabotaje, hechos de violencia en países como Iraq y Siria– y se incrementó la preocupación por el programa nuclear iraní después de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica denunciara los incumplimientos de Teherán en materia atómica. En cuanto a la tensión entre **Israel y Siria y Líbano**, en 2021 se siguieron produciendo ofensivas israelíes en territorio sirio contra objetivos vinculados a Irán y a Hezbollah y se mantuvo la tensión en la zona supervisada por Naciones Unidas (UNIFIL) en la frontera entre Líbano e Israel, con intercambio de proyectiles durante el año.

En relación a la **evolución** de los casos de tensión, el **38% de los casos se agudizaron durante el año, el 42% no registró cambios significativos respecto del 2020 y el 20% de**

**los casos experimentó una cierta mejora de la situación.** Por tanto, el número de casos en los que las condiciones empeoraron en 2021 es prácticamente el doble del número de contextos en los que la tensión registró una mejoría. Los continentes que concentraron un mayor número de tensiones que escalaron fueron África (50%) y Asia (42%). **Los casos cuyas dinámicas de conflictividad escalaron en 2021** fueron Burkina Faso, Djibouti, Eswatini, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Sudán, Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra), Sudán, Colombia, Haití, México, Venezuela, India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Irán-EEUU, Israel; e Israel-Siria-Líbano

Los casos que se agudizaron en 2021 hasta ser considerados tensiones de intensidad alta fueron Guinea, Nigeria, Nigeria (Biafra), Haití y Colombia.

En cuanto a los principales factores de causalidad, un 72% de los casos analizados de tensiones estaban vinculados a la oposición a las políticas internas o internacionales de determinados gobiernos o bien al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto; un 41% a demandas de autogobierno y/o identitarias; y un 31% a disputas por el control de territorios y/o recursos. Más específicamente, la oposición a las políticas internas o internacionales del **gobierno** estuvo presente en el 64% por ciento de los 98 escenarios de tensión, aunque en algunas regiones tal factor estuvo presente en un mayor porcentaje de casos, como en América Latina (100%) o África (73%). En cambio, en Asia la importancia de la oposición al gobierno (38%) fue muy inferior al de la media mundial. La oposición al **sistema** político, social o ideológico del Estado en su conjunto estuvo presente en el 22% de los casos. En Asia, sin embargo, dicho factor era importante

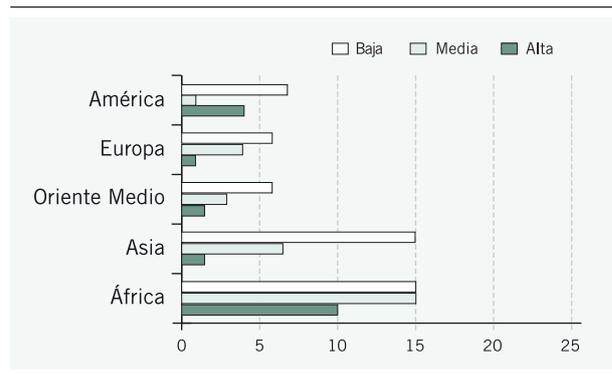
en la mitad de los casos identificados, mientras que en África dicho porcentaje se reducía al 10%. Por otra parte, la reivindicación de **aspiraciones de tipo identitario** estuvo presente en el 38% de los casos de tensión analizados en esta publicación, siendo especialmente relevante en Europa (82%) y, en menor medida, en Asia y Oriente Medio (un 46% en cada región). En cuanto a las **demandas de autodeterminación y autogobierno**, estas fueron un factor determinante en casi una cuarta parte de los escenarios de tensión a escala global. En Europa, sin embargo, tal factor estaba presente en el 73% de los casos, mientras que en América Latina no era una causa fundamental de la tensión en ninguno de los casos. El **control de los recursos** era un factor relevante en el 22% de los casos, mientras que el **control del territorio** era una causa importante en el 14% de las tensiones, aunque en Asia dicho porcentaje era más del doble (29%) y en América Latina no jugaba un rol preponderante en ninguno de los casos.

En consonancia con la tendencia observada en los últimos años, aproximadamente la mitad de las tensiones en todo el mundo tuvieron un **carácter interno (51%)**, una cifra parecida a la de 2020 (53%). Sin embargo, dicho porcentaje fue muy superior en regiones como América Latina (100%) o África (58%) y muy inferior en el caso de Europa (18%). Solamente una quinta parte de las tensiones (22%) fueron **internacionales**, pero algunas de ellas se contaron entre las de mayor intensidad en todo el mundo, como por ejemplo India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Irán-EEUU, Israel o Israel-Siria-Líbano. Finalmente, más de una cuarta parte de las tensiones fueron **internas internacionalizadas (27%)**, pero con importantes variaciones entre regiones (en Asia el 55% de los casos fueron de este tipo, mientras que América Latina no se registró ninguno).

### 2.2.2. Tendencias regionales

Como en los últimos años, **África** fue la región que concentró un mayor número de tensiones (40), lo que supone un porcentaje (41%) ligeramente superior al del 2020. En 2021 se consideraron seis nuevos casos –Djibouti, Eswatini, Etiopía-Sudán, Burkina Faso, Níger y Nigeria (Biafra)– y dejaron de ser analizados como tensiones otros cuatro casos –Argelia (AQMI), Madagascar, Malawi, Togo– de modo que el número total de tensiones en el continente en 2021 se incrementó en dos casos respecto del año anterior. Además, más de la mitad de las tensiones de alta intensidad en todo el mundo se concentró en África (10 sobre 19 casos), una cifra parecida a la del año anterior pero claramente superior a la del 35% que suponía en 2019. Los casos de mayor intensidad en África fueron: Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra) y Sudán. En 2020 todos estos casos ya

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



eran considerados tensiones de alta intensidad excepto Guinea, Sudán y Nigeria (Biafra). Por otra parte, el 50% de las tensiones en África escalaron durante el 2021 –lo que supone el 54% del total de casos que lo hicieron

el año pasado–, mientras que la situación solamente experimentó una cierta mejora en seis casos: Eritrea-Etiopía, Guinea-Bissau, Mozambique, Ruanda-Burundi, Ruanda-Uganda y Tanzania. Los casos que escalaron en 2021 fueron Burkina Faso, Chad, Djibouti, Eswatini, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Sudán, Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Níger, Nigeria, Nigeria (Biafra), RDC, Senegal (Casamance), Sudán, Túnez, Uganda. Aunque la tensión

entre Eritrea y Etiopía se redujo en 2021, hubo otros cuatro escenarios de tensión en los que Etiopía estaba involucrada –Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán y Etiopía-Sudán. Cabe destacar que 2021 fue un año de retrocesos en materia de gobernanza democrática para el continente africano, padeciendo cuatro golpes de Estado efectivos por parte de aparatos militares en Chad (abril), Malí (mayo), Guinea (septiembre) y Sudán (octubre), además de otro intento que fracasó en marzo en Níger. Desde 1999 no se registraba un año con estas cifras en el continente. Las razones que ayudan a explicar la eclosión del fenómeno son complejas y multicausales, pero existen dos elementos que se han observado en los últimos acontecimientos para justificar los mismos por los aparatos militares: el deterioro de la situación de la seguridad y la inestabilidad política.

Casi un 60% de las tensiones en África fueron de carácter interno, una cifra que se ha mantenido en niveles parecidos en los últimos años. Exceptuando la región de América Latina, donde todos los casos fueron de carácter interno, África fue la región con mayor proporción de este tipo de tensiones. Una cuarta parte de las tensiones en África fueron de tipo internacional –Eritrea-Etiopía, Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Sudán, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Ruanda, RDC-Uganda, Ruanda-Burundi, Ruanda-Uganda y Sudán-Sudán del Sur–, pero estas supusieron casi la mitad del total de tensiones internacionales en todo el mundo. La inmensa mayoría de las tensiones

internacionales se situaron en las regiones de los Grandes Lagos y África Central, con un protagonismo destacado por parte de países como Ruanda, Burundi, Uganda o Sudán. El restante 17% de las tensiones fueron internas internacionalizadas, el porcentaje más bajo del mundo si exceptuamos América Latina (región en la que no se registró ninguna tensión de este tipo). En cuanto a los factores de causalidad, la oposición al gobierno estaba presente en casi tres cuartas partes de los casos, siendo la segunda región del mundo con mayor prevalencia de este tipo de tensiones. Además, en otros cuatro casos la oposición al sistema también era una de las causas de fondo de la tensión – Mozambique, Kenia, Túnez y Argelia. Las cuestiones relacionadas con la identidad fueron un factor decisivo en un 30% de los casos en África, el segundo más frecuente en el continente después de la oposición al gobierno. En incidencia parecida a la identidad, el control o acceso a los recursos estuvo presente de manera importante en un 28% de los casos. Las demandas de autogobierno o autodeterminación fueron importantes en seis casos, mientras que el control del territorio lo fue en otros tres casos. Finalmente, cabe señalar que hubo varios países que estaban involucrados en varios escenarios de tensión, como Etiopía (cinco casos), Sudán y Ruanda (cuatro casos), o RDC, Nigeria y Uganda (tres casos).

***África concentró más de la mitad de las tensiones de máxima intensidad en todo el mundo –Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra) y Sudán– y más de la mitad de los casos que escalaron en 2021***

En **América** se registraron 12 escenarios de tensión, un 12% del total. En comparación con 2020, el incremento significativo de las protestas en Colombia y Cuba propició la inclusión de estos dos nuevos casos. Una tercera parte de los casos fueron de alta intensidad (Colombia, Haití, México y Venezuela), el porcentaje más alto en todo el mundo. Sin embargo, la gran mayoría de las tensiones (un 58%) fueron de intensidad baja y solamente hubo un caso de intensidad media. En cuanto a la evolución, la tensión se redujo en el 50% de los casos. Cabe destacar especialmente la reducción significativa de los homicidios en Centroamérica, de las protestas en Chile o de la conflictividad política y social en Bolivia o Venezuela. Por otra parte, una cuarta parte de los casos analizados en América Latina no registró cambios significativos respecto del año anterior y otra cuarta parte experimentó un incremento de la tensión (Colombia, Cuba, Haití). Cabe destacar que todas las tensiones en la región fueron internas, lo que contrasta con el porcentaje medio a nivel global (53%). En cuanto a los factores de causalidad, todas las tensiones en la región estuvieron vinculadas a la oposición a las políticas del gobierno, en dos casos al acceso o control de los recursos (México y Perú) y en un caso a la oposición al sistema (Cuba). Otros factores como las demandas vinculadas al autogobierno,

***En América Latina todas las tensiones fueron internas y estuvieron vinculadas a la oposición a las políticas del gobierno***

las cuestiones identitarias o el control del territorio tuvieron mucha menor relevancia que en otras regiones del mundo.

En **Asia** se contabilizaron 24 tensiones, la cuarta parte del total y una menos que el año pasado. Sri Lanka dejó de ser considerado escenario de tensión por la reducción sostenida de los niveles de conflictividad en los últimos años. Ocho de las tensiones estaban en Asia meridional –Bangladesh, India, India (Assam), India (Manipur), India (Nagalandia), India-China, India-Pakistán y Pakistán–, otras ocho en Asia oriental – China (Xinjiang), China (Tíbet), China (Hong Kong), China-Japón, China-Taiwán, Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. De Corea; Mar de la China Meridional), cuatro en el Sudeste asiático –Indonesia (Sulawesi), Indonesia (Papúa Occidental)– y otras cuatro en Asia central –Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán–. Como en años anteriores, hubo algunos países que estuvieron involucrados en varios escenarios de tensión, como China (siete tensiones), India (seis tensiones), Indonesia (tres tensiones) o Japón, Corea del Norte y Corea del Sur (dos tensiones cada país).

La gran mayoría de las tensiones (un 63%) fueron de baja intensidad, un 29% fueron de intensidad media y el restante 8% fue de alta intensidad (India-China e India-Pakistán). A pesar de contar con la proporción más alta del mundo de tensiones de baja intensidad, en 2021 hubo una parte importante de las tensiones en Asia (un 42%) que escalaron respecto del año anterior: Bangladesh, India (Assam), India (Manipur), India (Nagalandia), Indonesia (Papúa Occidental), Kazajistán, Kirguistán, Tailandia, Tayiskistán y Uzbekistán. Cabe destacar especialmente el incremento de la tensión en varios casos de India y en los cuatro países del Asia central analizados en este capítulo. El 42% de las tensiones no sufrió cambios significativos respecto del año anterior y el 16% experimentó una cierta mejora. Por otra parte, un tercio de las tensiones fueron internas internacionalizadas, un 38% fueron internas y un 29% fueron internacionales, siendo así Asia la región con un porcentaje más alto de tensiones internacionales. La mayor parte de las mismas se sitúan en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu); la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico; o la tensión entre China-Taiwán, y la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam. Las otras dos tensiones internacionales, como ya se ha mencionado, corresponden a las disputas entre India y China e India y Pakistán.

En cuanto a las causas de fondo, la oposición al gobierno estuvo presente en el 38% de los casos, siendo a mucha distancia la región del mundo con una menor incidencia de este factor. En cambio, la oposición al sistema o al estado fue una causa importante en el 50% de los casos, siendo claramente el continente con un mayor número de disputas (12) vinculadas a esta cuestión: China (Xinjiang), China (Tíbet), China (Hong Kong), Corea, RPD-Rep. de Corea, India, Indonesia (Sulawesi), Kazajistán, Kirguistán, Lao, RPD, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Cabe destacar la importancia de este factor en China y Asia central. Asia también fue la región del mundo en la que las tensiones vinculadas a la identidad (11) tuvieron un mayor protagonismo en todo el mundo: en China, las regiones de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong; en India los estados de Assam, Manipur y Nagalandia, así como el propio contencioso histórico entre India y Pakistán; en Indonesia, las regiones de Sulawesi y Papúa Occidental; y también los casos de Kirguistán y Lao RPD. Las demandas de autodeterminación o autogobierno fueron una causa en el 29% de las tensiones en Asia. Finalmente, el control de los recursos estuvo presente en el 25% de los casos y el control del territorio en el 29% de los mismos.

En **Europa** se registraron 11 casos, uno más que el año pasado por la inclusión de Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), caso que en 2020 fue considerado como un conflicto armado por el reinicio de la guerra en el mes de septiembre de 2020 y una escalada previa de las hostilidades en julio en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán que provocaron la muerte de unas 5.000 personas y el desplazamiento forzado de otras decenas de miles (mayoritariamente armenias). Precisamente la disputa entre Armenia y Azerbaiyán fue el único caso de alta intensidad en la región (en 2020 no se contabilizó ningún caso de este tipo), mientras seis contextos fueron de intensidad baja y otros cuatro de intensidad media. En cuanto a la evolución de las tensiones, en cuatro casos hubo una cierta mejoría de la situación, en otras cuatro no se produjeron cambios relevantes respecto del 2020 y en tres casos se observó un deterioro de la situación; en Bosnia y Herzegovina, Serbia-Kosovo y Turquía. Por otra parte, Europa fue la región del mundo que albergó un mayor porcentaje de tensiones internas internacionalizadas (55%). Un 18% de los casos fueron tensiones internas y un 27% fueron internacionales –Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Turquía-Grecia, Chipre y Serbia Kosovo. En cuanto a los factores de causalidad, destaca especialmente el hecho de que las cuestiones identitarias estuvieran presentes en el 82% de los casos, un porcentaje que es más del doble que la media mundial. Los nueve casos en los que este factor fue importante son Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj),

***Asia fue la región del mundo con un mayor porcentaje de tensiones vinculadas a la oposición al sistema político, social, económico e ideológico del Estado***

***Más del 80% de las tensiones en Europa estuvieron vinculadas a cuestiones identitarias y las demandas de autogobierno o de autodeterminación fueron relevantes en casi tres de cada cuatro casos***

Bosnia y Herzegovina, Turquía-Grecia, Chipre, España (Cataluña), Georgia (Abjasia), Georgia (Osetia del Sur), Moldova, Rep. de (Transdniestria), Rusia (norte del Cáucaso) y Serbia-Kosovo. El segundo factor con mayor incidencia en las tensiones de la región fueron las demandas vinculadas al autogobierno y la autodeterminación, presentes en el 73% de los casos. Dicho porcentaje también fue el más alto del mundo, casi tres veces superior a la media global. Por otra parte, la oposición al gobierno estaba presente en un 55% de los casos, mientras que la oposición al sistema político, económico, social o ideológico del Estado lo estaba en el 18% de los casos, cifras parecidas a las del año anterior. Finalmente, el control de los recursos fue un factor importante en un caso –Turquía-Grecia, Chipre–, mientras que el control del territorio lo fue en dos: Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Turquía - Grecia y Chipre.

Finalmente, en **Oriente Medio** se identificaron 11 escenarios de tensión, uno menos que el año pasado. Si bien en 2020 la región fue la que tuvo un mayor porcentaje de casos de intensidad alta (una tercera parte del total), en 2021 supusieron el 18% (Irán-EEUU, Israel e Israel-Siria-Líbano). La mayor parte de los casos (un 55%) fueron de baja intensidad, mientras que el 27% de los casos fue de intensidad media. En cuanto a la evolución de los casos, la práctica totalidad de los mismos se mantuvo sin cambios importantes respecto de 2020, pero en Líbano se deterioró la situación por las tensiones y desacuerdos entre el primer ministro Saad Hariri y el presidente Michel Aoun sobre la formación de gobierno, por los enfrentamientos armados que se produjeron en el marco de protestas de Amal y Hezbollah en Beirut en los que varias personas murieron y decenas resultaron heridas o bien por las protestas (y enfrentamientos entre manifestantes y policías) que se registraron durante el año en varias ciudades del país a causa del grave deterioro en la situación económica y de la falta de suministros. De los 11 casos que se registraron en Oriente Medio, cuatro fueron tensiones internas, cinco fueron internas internacionalizadas y dos fueron internacionales. Cabe destacar que precisamente las dos tensiones internacionales (Irán-EEUU, Israel y Israel-Siria-Líbano) fueron las de mayor intensidad en la región. En cuanto a las causas de las tensiones en la región, el factor con mayor incidencia fue la oposición al gobierno (64%), seguido de las cuestiones identitarias (46%), las demandas de autodeterminación y autogobierno y la oposición al sistema del Estado (27% en ambos casos) y el control de los recursos y del territorio (un 18% en ambos casos). Irán estuvo directa o indirectamente vinculado a seis escenarios de tensión de la región, mientras que EEUU lo estuvo en dos casos.

## 2.3. Tensiones: evolución anual

### 2.3.1. África

#### África Occidental

Guinea	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos

#### Síntesis:

La muerte del presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, tras más de dos décadas en el poder, fue aprovechada por el Ejército para dar un nuevo golpe de Estado y conformar una Junta Militar. En 2010 la celebración de elecciones permitió el retorno al sistema democrático, con la presidencia del opositor Alpha Condé. Sin embargo, los comicios se vieron empañados por la violencia y por el auge de los sentimientos identitarios enfrentados entre las principales comunidades étnicas del país. La ausencia de una estrategia para la reconciliación nacional y los obstáculos a la reforma del sector de seguridad, con un Ejército omnipresente en la actividad política guineana, mantienen al país en una situación de inestabilidad.

**La tensión política en el país se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales que dieron al presidente Alpha Condé su tercer mandato**

**—señalado por la oposición como inconstitucional—, derivando en un golpe de Estado que derrocó al Gobierno.** El año comenzó con importantes tensiones políticas en el país generadas tras la victoria electoral del presidente Alpha Condé en las elecciones de octubre de 2020, que estuvieron caracterizadas por la represión y la violencia. Su reelección, en lo que supuso su tercer mandato, abrió un periodo de crisis nacional, siendo denunciado por la oposición como una vulneración del límite constitucional de dos mandatos presidenciales, que Condé esquivó mediante un cuestionado ajuste constitucional aprobado en un referéndum de marzo de 2020. Desde ese momento la respuesta gubernamental se tradujo en un aumento de la represión de la disidencia en todo el país, cerrando la sede del principal partido de la oposición —Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG)—, así como encarcelando a líderes opositores del UFDG, el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) o miembros de la sociedad civil. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron en febrero de 2021 que al menos 400 miembros de la oposición y de la sociedad civil en todo el país se encontraban encarcelados —arrestados en torno al referéndum de marzo de 2020 y las elecciones presidenciales de octubre de 2020—, y que al menos cuatro de ellos murieron en prisión, lo que generó la condena de actores internacionales, exigiendo la

*Guinea sufrió su tercer golpe de Estado desde la consecución de la independencia*

apertura de una investigación y el fin de la represión y persecución a la oposición. En Nigeria.

Tras meses de crisis política en el país, el 5 de septiembre miembros del Ejército, encabezados por el coronel Mamay Doumbouya, dieron un golpe de Estado que derrocó al Gobierno presidido por Condé. El golpe —el tercero que se produce en el país desde su independencia en 1958— dejó un balance de al menos 10 personas muertas. Doumbouya se autonombró presidente de la transición, disolvió el Gobierno, detuvo al presidente Condé, suspendió la Constitución y puso al frente del país a la junta militar denominada Comité Nacional de Reagrupamiento y Desarrollo (CNRD) que nombró gobernadores militares, prohibió a los funcionarios del Gobierno salir del país, arrestó a varios políticos y liberó a 80 presos políticos. También se anunció una hoja de ruta de transición, aunque sin determinar fecha para la celebración de elecciones, estipulando que los miembros del Consejo Nacional de Transición no podrán presentarse a las mismas cuando se celebren. El golpe generó reacciones dispares al interior y exterior del país. A nivel interno se produjeron manifestaciones de apoyo a los golpistas en varios puntos del país, y el líder de la UFDG, Cellou Dalein Diallo, lo calificó de “acto patriótico”. Por contra, provocó una condena internacional generalizada (UA, CEDEAO, EEUU, UE, Francia, China, Turquía, entre otros) que exigió el retorno al orden constitucional y la liberación de Condé. La UA y la CEDEAO suspendieron a Guinea de sus organismos, y la CEDEAO envió una

misión diplomática al país encabezada por el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, y el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara. Posteriormente la CEDEAO impuso sanciones a los miembros del CNRD, incluida la prohibición de viajar y la congelación de activos, y exigió la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de seis meses, ante la negativa de la Junta.

Las tensiones entre la junta militar —que nombró el 6 de octubre al civil Mohamed Béavogui como primer ministro— y la CEDEAO y los socios internacionales se mantuvieron hasta finalizar el año, incrementándose debido a los rumores de que Doumbouya contemplaba una transición de tres años. La CEDEAO, en una nueva medida de presión para la convocatoria de elecciones y la liberación de Condé —que fue finalmente autorizado el 31 de diciembre a salir del país por un mes debido a razones médicas—, confirmó el 7 de noviembre el mantenimiento de las sanciones a los miembros de la junta, y nombró al exjefe de la Oficina de la ONU para África Occidental y el Sahel, Mohamed Ibn Chambas, como enviado especial a Guinea.

Por otro lado, Guinea padeció durante el año un nuevo brote de ébola, el primero desde la epidemia de 2013-2016 que provocó más de 2.500 muertes en el país —11.300 en toda la región de África

occidental. El brote, identificado el 13 de febrero, se contuvo finalmente el 19 de junio, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), cobrándose 12 vidas —una cifra muy inferior a la de la anterior epidemia, en gran medida gracias a la experiencia acumulada por las autoridades sanitarias.

Malí	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social

#### Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, Malí ha hecho frente a diversos periodos de inestabilidad, incluyendo el golpe militar de 1968; una rebelión popular y militar en 1991; y revueltas e insurgencia tuareg en demanda de mayor participación política y desarrollo del norte del país. Malí celebró sus primeras elecciones pluripartidistas en 1992, si bien desde entonces los diversos comicios han transcurrido en medio de críticas opositoras en relación a la falta de garantías democráticas. El peso del Ejército se evidenció con un nuevo intento de golpe militar en el año 2000, que fue desbaratado. La inestabilidad se incrementó una vez más en 2012, con la toma de control del norte por parte de grupos tuareg e islamistas y un golpe de Estado militar que forzó la caída del Gobierno. A partir de ese momento los sucesivos Gobiernos que ha tendido el país se han enfrentado a múltiples desafíos políticos, económicos y de seguridad, persistiendo la violencia en la zona septentrional del país, y extendiéndose hacia la región central. Durante 2019 se produjo un incremento significativo de las protestas y movilizaciones populares, que fueron seguidas en 2020 de un golpe de Estado y la conformación de un nuevo gobierno transicional en el país.

**Un año más las tensiones políticas se incrementaron en el país debido al deterioro de la situación de seguridad, la crisis en el gobierno de transición y el aumento del descontento popular, dando lugar a un nuevo golpe de Estado.** Después de diversas huelgas convocadas por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores de Malí (UNTM) que generaron una crisis en el Ejecutivo, el coronel Assimi Goïta

—vicepresidente interino del Gobierno y responsable del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Ibrahim Boubacar Keita en agosto de 2020— volvió a encabezar un nuevo golpe castrense el 25 de mayo, deteniendo al presidente de transición, Bah N'Daw, y al primer ministro, Moctar Ouane, a los que acusaba de haber violado la Carta de la Transición al renovar el Gobierno sin contar con la aprobación de la vicepresidencia. La crisis política se había iniciado el 14 de mayo, cuando el entonces primer ministro Ouane presentó su dimisión, siendo rechazada por el presidente N'Daw, quien le encargó la conformación de un gobierno más inclusivo en el que la clase política tuviera más peso —en detrimento de la militar. El nuevo ejecutivo propuesto excluyó a los hasta entonces

*Malí padeció un segundo golpe de Estado en menos de nueve meses*

ministros de Defensa y Seguridad, los generales Sadio Camara y Modibo Koné, cuyas carteras dependían del ala militar del Gobierno de Transición, lo que motivó el golpe militar. N'Daw y Ouane, fueron retenidos por el Ejército en la base militar de Kati, siendo liberados posteriormente una vez anunciaron la renuncia forzada a sus cargos. Posteriormente, el exvicepresidente Assimi Goïta fue declarado presidente del país con la validación del Tribunal Constitucional maliense bajo el mandato de conducir la transición pactada en agosto de 2020 de 18 meses hacia las elecciones calendarizadas para finales de febrero de 2022. Goïta nombró a Choguel Kokalla Maïga nuevo primer ministro.

**El golpe generó una nueva crisis política en Malí, con reacciones diferentes en el interior y exterior del país.**

A nivel interior, el golpe fue acogido con un elevado apoyo popular, registrándose manifestaciones de apoyo a los militares que expresaban la frustración con el anterior gobierno debido su incapacidad para revertir la situación de inseguridad y pobreza. En el exterior llevó a un aumento de las tensiones entre la nueva Junta militar y la comunidad internacional, cuyos efectos se trasladaron al complejo militar de seguridad. Los principales socios internacionales de Malí, incluido el bloque regional de la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), la UA, la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Malí (MINUSMA), la UE, Francia, EEUU, Reino Unido y Alemania firmaron una declaración conjunta en la que condenaron el cambio inconstitucional de gobierno y exigieron la liberación de los altos cargos y sus colaboradores detenidos. La UA y la CEDEAO —que envió una misión diplomática al país para mediar— suspendieron a Malí de sus respectivos organismos y amenazaron con sanciones si no se restablecía un gobierno liderado por civiles. Por su parte, Francia amenazó con la imposición de sanciones por parte de la UE, así como con la retirada de las tropas francesas en el país que componen la operación Barkhane, y suspendió temporalmente, el 3 de junio, todas sus operaciones militares conjuntas con las tropas maliense, que se reanudaron un mes después. Asimismo, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una condena por unanimidad, pero no llegó a incluir medidas coercitivas tras el bloqueo de Rusia y China, mientras que el Banco Mundial congeló los pagos al país.

En un intento por presionar a la Junta militar para acelerar la transición hacia un gobierno civil, el 16 de septiembre la CEDEAO impuso las primeras sanciones, que generaron manifestaciones en contra en el país. Posteriormente, tras el anuncio de Goïta de que no se cumpliría el plazo para la celebración de las elecciones, el 7 de noviembre la CEDEAO impuso nuevas sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos a 149 funcionarios estatales (excluyendo a Goïta en un aparente intento de mantener abierta la línea de comunicación). La UE también anunció el 15 de noviembre la imposición de sanciones a “aquellos que obstruyen” la transición de Malí.

En medio de las crecientes tensiones con Francia y los socios europeos, el Gobierno de Malí anunció un **acuerdo con Rusia para el despliegue de fuerzas rusas en el país** –que según informes de prensa serían de la empresa de seguridad privada Wagner Group, aunque tanto el Gobierno de Malí como el de Rusia lo negaron. El anuncio generó una condena conjunta a finales de diciembre de 16 países europeos y Canadá, quienes afirmaron que el despliegue de mercenarios de Wagner sería “incompatible” con su presencia. Anteriormente, el 13 de diciembre, la UE había impuesto sanciones a Wagner Group por presuntamente cometer graves abusos contra los derechos humanos en varios países, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales. En el país se produjeron varias manifestaciones en apoyo del acuerdo con Rusia.

Nigeria	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN

#### Síntesis:

Tras la independencia en 1960, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para abordar los problemas asociados con ciudadanía, etnia, religión o distribución de recursos ha agravado las percepciones de agravios y descontento, lo que ha llevado al surgimiento de demandas separatistas en varias regiones. Además, desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas. Paralelamente, las acciones de grupos criminales en el noroeste del país, de origen multicausal, se han multiplicado desde 2018.

**En Nigeria se produjo un incremento de la violencia y la inestabilidad en diferentes escenarios del país durante el 2021, más allá del grave conflicto armado vinculado a las acciones de Boko Haram que afecta a los tres estados del noreste del país y la cuenca del Lago Chad.<sup>11</sup> En el noroeste del país, se produjo un aumento de la violencia iniciada en 2018, centrada en**

**las actividades de grupos criminales, a lo que se sumó el clima permanente de violencia intercomunitaria del cinturón central del país, así como el incremento de enfrentamientos y acciones insurgentes en el estado de Biafra.<sup>12</sup>** Cabe añadir también la reactivación de acciones en el Delta del Níger contra instalaciones petrolíferas.

**El clima de violencia criminal, actos de saqueo, ataques, secuestros de centenares de personas en el noroeste del país fue en aumento durante el año,** siguiendo la tónica de años precedentes. Las operaciones militares, principalmente en el estado de Zamfara –ataques terrestres y aéreos– contra las bases de estos grupos criminales, situadas en bosques alejados, provocaron la expansión de sus actividades a los estados de Kaduna, Katsina, Níger y Sokoto por la presión de los cuerpos de seguridad –estados donde los cuerpos de seguridad también llevaron a cabo acciones militares de envergadura–, el apagón de las telecomunicaciones por parte del Gobierno y las restricciones en el acceso a combustible y el suministro de alimentos, así como las limitaciones a los movimientos de ganado y la reducción de los horarios de los mercados, como medidas para presionar a los grupos criminales. En estos cinco estados del noroeste del país (Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger) los actos de violencia provocaron 4.162 víctimas mortales según ACLED, cifra que se debe relativizar dadas las dificultades para diferenciar las acciones de estos grupos de otras dinámicas de violencia, debido a la multiplicidad de actores, entre ellos grupos criminales, cuerpos de seguridad, actores armados yihadistas, grupos vinculados a comunidades ganaderas y milicias de autodefensa civiles. Esta violencia tiene sus raíces en la competencia por los recursos entre las comunidades ganaderas fulani y las comunidades agrícolas hausa, ha escalado por la implicación de bandas criminales dedicadas al robo de ganado, secuestros para obtener rescates y saqueos e incendios de diversas localidades, situación que también han aprovechado actores con agendas yihadistas. Según el Nigerian Security Tracker, en 2021 se produjeron 3.948 víctimas mortales en estos cinco estados del noroeste de Nigeria. Para poner de manifiesto el incremento de la violencia, en los estados de Kaduna, Katsina y Zamfara se produjeron 2.634 víctimas mortales, cifra superior a las 2.481 víctimas mortales de 2020, y a las 1.988 víctimas mortales de 2019. Ante la gravedad de la situación, en noviembre el Tribunal Supremo Federal calificó de terroristas los grupos de ladrones y milicias criminales. El 14 de diciembre, grupos de jóvenes se movilizaron en la capital federal, Abuja, así como en la mayoría de los estados del noroeste para protestar por el grave clima de inseguridad. La violencia intercomunitaria entre comunidades ganaderas y agrícolas también afectó a otros estados del cinturón central del país causando centenares de víctimas mortales durante el año.

11. Véase el resumen de Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

12. Véase resumen de Nigeria (Biafra) en este capítulo.

Cabe destacar la conclusión de la investigación por parte del Panel de Investigación Judicial del estado de Lagos sobre la brutalidad policial y los abusos de los derechos humanos cometidos durante las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en octubre de 2020 como consecuencia de las medidas excepcionales impuestas por el Gobierno para frenar el avance de la pandemia de la COVID-19 y las movilizaciones sociales en contra del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y, en especial, de la unidad especial antirrobo Special Anti-Robbery Squad (SARS).<sup>13</sup> El 18 de octubre culminó la investigación que estableció compensaciones a 70 víctimas de la violencia policial y miles de personas se manifestaron el 20 de octubre en todo el país para conmemorar a las víctimas de la brutal represión contra el movimiento #ENDSARS.

**Las operaciones militares contra los grupos criminales en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, provocaron la expansión de sus actividades a los estados de Kaduna, Katsina, Níger y Sokoto por la presión de los cuerpos de seguridad**

**La histórica tensión entre el Estado nigeriano y los movimientos separatistas de la sureña región de Biafra**

**fue en aumento en la segunda mitad de 2020 y sobre todo en 2021**, cuando se constató un incremento de la violencia armada. El aumento de la persecución de la movilización independentista y la creciente inseguridad contribuyeron al establecimiento de un grupo paramilitar de Biafra, la Red de Seguridad del Este (ESN), brazo armado del IPOB, en diciembre de 2020. Inicialmente, la ESN se presentó como una fuerza regional para expulsar a criminales y pastores ilegales (comúnmente relacionados con las comunidades norteñas fulani) que tradicionalmente compiten por los recursos con las comunidades agrícolas

de Biafra. Poco después el Ejército nigeriano se desplegó para ubicar los campamentos de ESN, y el 22 de enero de 2021 llevaron a cabo acciones militares en la localidad de Orlu, lo que desencadenó las acciones insurgentes de la ESN. Esta situación llevó al líder del IPOB, Nnamdi Kanu, a hacer un llamamiento a que el ESN cesara el fuego y se retirara de la localidad, lo que redujo la tensión. Sin embargo, las acciones del ESN y de los cuerpos de seguridad en persecución del grupo continuaron durante el año causando decenas de víctimas mortales.

En abril, la coalición opositora de Camerún Consejo de Gobierno de Ambazonia (Ambazonia Governing Council, AGovC) y el IPOB anunciaron una alianza a la que Camerún y Nigeria respondieron en agosto anunciando la colaboración de los cuerpos de seguridad de ambos países contra las insurgencias respectivas.<sup>14</sup> En junio de 2021 se produjo la detención en el extranjero por la Interpol y su extradición a Nigeria del líder del IPOB, acusado de sedición, incitación al odio étnico y traición. Desde entonces, se produjo una intensificación de las protestas y movilizaciones sociales, sumada a múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad de Nigeria (NSF). Amnistía Internacional informó en agosto de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y torturas cometidos por los cuerpos de seguridad en su respuesta a la violencia en el sureste del país entre enero y junio. El juicio del líder del IPOB se pospuso en octubre y diciembre de 2021, de modo que continuaron las movilizaciones en el sureste exigiendo su liberación.

Nigeria (Biafra)	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
<b>Actores:</b>	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)

#### Síntesis:

Tras la independencia en 1960, el estado nigeriano se ha enfrentado al reto de articular las diferentes nacionalidades étnicas. El ejemplo más paradigmático fue la guerra civil entre el Estado y la autoproclamada República de Biafra (1967-1970), en la que murieron entre 1 y 3 millones de personas. Después de tres décadas de gobierno militar, el advenimiento de la democracia en 1999 generó nuevas expectativas de acomodación de identidades y demandas de reestructuración política que no se han hecho realidad, alimentando los agravios separatistas. En este contexto, las demandas de autodeterminación han resurgido en Biafra a través de organizaciones no violentas, principalmente con el Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra (MASSOB), creado en 1999 y luego por otros movimientos secesionistas incluido el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), creado en 2012. El ascenso al poder de Muhammadu Buhari en 2015, percibido como una amenaza en las regiones del sur, ha contribuido a un incremento de la tensión. El encarcelamiento en 2015 del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, provocó un incremento de las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad nigerianos, que desde entonces emprendieron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales, situación que se agravó con la ilegalización del IPOB en 2017 y el incremento de la violencia en la segunda mitad del 2020, especialmente en el contexto de la prohibición del IPOB.

13. Véase Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2021.

14. Véase el resumen de Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

## Cuerno de África

Etiopía	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

### Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed provocaron tensiones en la federación, en especial entre el Gobierno Federal y el TPLF, que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré, conflicto de dimensiones regionales por la implicación de Eritrea.

**El país se sumió en un grave deterioro de la situación como consecuencia de los impactos en el conjunto del país de la guerra entre actores armados de la región de Tigré y el Gobierno federal,<sup>15</sup> así como por los recurrentes brotes de violencia intercomunitaria en diferentes partes del país y por las acciones del Ejército de Liberación Oromo (OLA) en distintos momentos del año. Se produjeron actos de violencia por parte de grupos civiles de autodefensa y milicias contra población civil**

de la comunidad tigré como consecuencia del conflicto y también contra población civil de la comunidad amhara – la más numerosa del país y con presencia en las diferentes regiones del país–, provocando el desplazamiento de decenas de miles de personas en diferentes regiones. En la región de Oromiya, el OLA y los cuerpos de seguridad se enfrentaron causando centenares de víctimas mortales. Por otra parte, cabe destacar el incremento de la tensión y los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad etíopes y sudaneses y milicias en la frontera común, que causaron decenas de víctimas mortales durante el año, así como la ocupación por parte de Sudán de territorios en disputa. Sudán y Etiopía mantienen una disputa en torno a la región fronteriza de al-Fashaga (un área de Sudán al este del río Atbara y al sur del río Tekeze). Desde 2008, Etiopía ha abandonado todas las reclamaciones sobre al-Fashaga siempre que Sudán permitiera que los agricultores y activistas etíopes armados y no armados permanecieran en el área. Con el estallido de la guerra de Tigré, las fuerzas sudanesas pudieron penetrar a la región debido a un acuerdo con Etiopía. Cuando los activistas armados amhara abandonaron la zona en disputa para ayudar al Gobierno federal etíope en la guerra de Tigré, las fuerzas sudanesas comenzaron a expulsar a los agricultores etíopes, incluidos los amharas, rompiendo efectivamente el compromiso de 2008. Etiopía también acusó a Sudán de ejecutar a civiles en la zona. Los enfrentamientos comenzaron por primera vez en el área de Abu Tyour a lo largo de la frontera entre Etiopía y Sudán el 15 de diciembre de 2020 cuando activistas armados amhara supuestamente respaldados por el Gobierno etíope tendieron una emboscada a varios oficiales militares sudaneses, matando a 4 de ellos. Desde entonces, Sudán ha recuperado la mayor parte de la frontera en disputa. A pesar de que sigue siendo territorio legalmente sudanés, la región de Amhara calificó el despliegue sudanés como una invasión y afirmó que al-Fashaga pertenecía a la región de Amhara en Etiopía. Abiy Ahmed respaldó esa afirmación. Debido a que Sudán expulsó a los militantes amhara, los agricultores sudaneses comenzaron a cultivar sus tierras por primera vez en 25 años. Los militantes amharas también estuvieron hostigando a agricultores sudaneses, causando algunos brotes de violencia y víctimas mortales.

Kenia	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
<b>Actores:</b>	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS

15. Véase el resumen sobre Etiopía (Tigré) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

---

### Síntesis:

La política y la economía de Kenia han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. A partir de 2002, el proceso clientelar para suceder al autocrático Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) se interrumpió por la victoria de Mwai Kibaki. Desde entonces, han aflorado diferentes conflictos etnopolíticos en el país lo que ha provocado un clima de violencia política durante los diferentes ciclos electorales. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras este proceso electoral se formó un frágil Gobierno de unidad nacional entre Mwai Kibaki y Raila Odinga. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007, aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, la intervención militar de Kenia en Somalia desencadenó ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenia, la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenia, y tensiones entre Kenia y Somalia a causa de sus diferentes agendas políticas, lo que suponen retos añadidos a la estabilidad del país.

---

**El clima de violencia política y polarización entre los partidarios del actual presidente, Uhuru Kenyatta, y del líder opositor Raila Odinga, y los partidarios de su vicepresidente William Ruto y aspirante a la presidencia, fue en aumento, así como por la persistencia de los ataques del grupo armado al-Shabaab en el este y el noreste y el incremento de la violencia intercomunitaria en diversas partes del país.** Cabe destacar el levantamiento del toque de queda vinculado a la pandemia de la COVID-19 en octubre, vigente desde marzo de 2020. El año 2021 se vio marcado por las maniobras políticas del presidente Uhuru Kenyatta y su aliado de facto, el líder opositor Raila Odinga, contra el vicepresidente William Ruto, de cara a las elecciones generales de agosto de 2022. En marzo, Kenyatta creó la coalición One Kenya Alliance (OKA) con cuatro partidos opositores, que no habían escogido su candidato presidencial a finales de diciembre de 2021. En mayo el Tribunal Supremo de Kenia dirimió que el intento de reforma de la Constitución por parte del presidente Kenyatta y su aliado Raila Odinga era ilegal. Esta decisión fue vista como un apoyo a la posición del vicepresidente, William Ruto, opuesto a la reforma constitucional. Kenyatta, líder del Jubilee Party, fue perdiendo apoyos durante el año en favor de los sectores dentro del partido favorables a Ruto. El líder del Orange Democratic Movement (ODM) y candidato preferido del presidente Kenyatta, Raila Odinga, lanzó oficialmente el 10 de diciembre su quinta candidatura a la presidencia antes de las elecciones de agosto de 2022. El vicepresidente Ruto, el 22 de diciembre, calificó a Odinga como un

“proyecto estatal”, y también acusó al Gobierno en las últimas semanas de utilizar los mecanismos del Estado para apoyar la candidatura de Odinga. El 29 de diciembre, los legisladores se enfrentaron en el Parlamento por los cambios propuestos a la ley que rige la conducta de los partidos políticos y las formaciones de coaliciones, aspecto clave de cara a las elecciones de 2022.

Por otra parte, el grupo armado somalí al-Shabaab continuó llevando a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil, con explosión de artefactos improvisados durante todo el año, principalmente en los condados del noreste y este (Mandera, Wahir, Garissa y Lamu) causando decenas de víctimas mortales. Al-Shabaab intensificó los ataques antes de la temporada navideña cristiana. No obstante, también se produjeron ataques esporádicos reivindicados por al-Shabaab en otras partes del país alejadas de la frontera somalí, como la detonación de un artefacto explosivo en diciembre en la localidad de Kamloma (condado de Kisumu, oeste) que causó tres víctimas mortales, incluyendo al militante del grupo armado. Por otra parte, los condados del norte registraron una persistente violencia entre comunidades, alimentada en parte por la grave sequía que afecta al país y que ha obligado a las comunidades de pastores a trasladarse en busca de agua y pastos, así como por la proximidad de las elecciones generales de 2022, que los partidos políticos tradicionalmente instrumentalizan en beneficio propio. Los robos de ganado, ataques de milicias comunitarias y represalias fueron constantes durante todo el año, entre las comunidades gabra, degodia y borana, principalmente en el condado de Marsabit, y en menor medida en Wajir (noreste), Turkana (noroeste) y Samburu (centro-norte, fronterizo con Marsabit). El condado de Laikipia (centro) también fue escenario de violencia intercomunitaria y robos de ganado a partir de septiembre, causando decenas de víctimas mortales. ACLED estableció en 383 el número de víctimas mortales en el conjunto del país, incluyendo por las acciones de los cuerpos de seguridad, al-Shabaab y la violencia intercomunitaria, así como otros hechos de violencia como las movilizaciones sociales y la represión policial. Según desveló Deadly Force, se produjo una reducción del número de muertes a manos de la Policía en comparación con las cifras de años anteriores.<sup>16</sup> En 2015 murieron 143 personas a manos de la Policía, pasando a 205 personas en 2016, 256 en 2017, 250 en 2018, 122 en 2019, 128 en 2020, mientras que en 2021 murieron 97 personas. La escalada de la violencia policial en 2017 coincidió con el ciclo electoral que vivió el país, por lo que se prevé una nueva escalada de la violencia durante el próximo año como consecuencia del clima preelectoral que vive el país de cara a las elecciones de agosto 2022.

---

16. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto del rotativo keniano Daily Nation, Nation Newsplex, busca registrar todas las muertes resultantes de operaciones policiales en Kenia, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado. La base está configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority, otras agencias gubernamentales y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Finalmente, cabe destacar la mejora de las relaciones entre Kenia y Somalia tras la mediación de Qatar. El 6 de mayo ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas. Esta decisión había venido precedida por un grave deterioro de la situación entre ambos países derivado de la ruptura de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2020 por parte de Somalia, además de las acusaciones por parte de Somalia de apoyo militar por parte de Kenia a milicias somalíes del estado somalí de Jubalandia, con quien el Gobierno Federal somalí tiene diferentes contenciosos. No obstante, el veredicto en octubre de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya relativo a la disputa territorial entre ambos países fue favorable a Somalia (Nairobi reclamaba para sí una zona rica en hidrocarburos en las aguas territoriales en disputa), lo que provocó el rechazo de la sentencia y de la jurisdicción del CIJ por parte de Kenia.

## Grandes Lagos y África Central

Chad	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad Interna
<b>Actores:</b>	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Transformateurs), grupos armados chadianos (entre otros, FACT, CCMSR, UFR), grupo armado nigeriano Boko Haram, milicias comunitarias, milicias privadas

### Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas *janjaweed*. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria. Tras las elecciones de 2016, ganadas sin sorpresas por Idriss Déby, persistió el clima de

inestabilidad social, que se agravó de cara a las elecciones de 2021 con la represión de la movilización social y la persecución de la oposición política. Por último, cabe destacar las intervenciones militares en el norte contra grupos con base en Libia y contra la minería ilegal, y contra Boko Haram en la región del Lago Chad, así como periódicos enfrentamientos intercomunitarios por la propiedad y usos de la tierra.

**La situación en Chad se deterioró considerablemente como consecuencia de la muerte del presidente Idriss Déby y la toma del control de las instituciones del Estado por parte de una junta militar liderada por su hijo, suplantando al Gobierno vigente, lo que supuso un golpe de Estado militar.** Esta situación tuvo lugar en medio de un clima de grave inestabilidad vinculada a la ofensiva rebelde del grupo armado Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT) en el centro y norte del país, perpetrada el mismo día en que se celebraban las elecciones presidenciales el 11 de abril. A su vez, dichas elecciones estuvieron enmarcadas en un clima de represión y persecución política de la oposición.<sup>17</sup> Esta situación de inestabilidad se había agravado durante el año 2020 por la instrumentalización política de la situación de excepcionalidad derivada de las restricciones para limitar la expansión de la pandemia de la COVID-19, con el objetivo de reprimir a la oposición política. Cabe también destacar la persistencia de enfrentamientos intercomunitarios en diversas partes del país y las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.<sup>18</sup>

El 19 de abril murió el presidente de Chad supuestamente por heridas en los combates contra los rebeldes del FACT en la localidad de Mao, en el norte del país, según anunció el Ejército el día siguiente. Una junta militar suspendió la Constitución, instauró el toque de queda, creó el Consejo Militar de Transición (CMT) compuesto por 14 generales y nombró al general Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido, como nuevo presidente del CMT para los próximos 18 meses.<sup>19</sup> Mahamat “Kaka” había ocupado el poderoso cargo de comandante en jefe de la guardia presidencial (la dirección general de los servicios de seguridad o DGSSIE, el cuerpo de élite las Fuerzas Armadas chadianas). El 21 de abril el CMT publicó una Carta Transicional que establecía que el Gobierno y el Parlamento seguirían funcionando hasta que se formaran un consejo de transición nacional y un gobierno de transición. El 26 de abril el CMT nombró al candidato presidencial a las elecciones del 11 de abril, Albert Pahimi Padacké, como nuevo primer ministro interino, y el 2 de mayo el CMT nombró a un gobierno de transición formado por 40 miembros y presidido por Pahimi Padacké. La mayoría de los actores de la comunidad internacional hicieron un llamamiento al retorno al orden constitucional pero no condenaron el golpe de Estado. Entre ellos, la UA el 22 de abril instó a la junta militar a devolver el

17. Véase Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2021.

18. Véase el resumen de Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

19. Véase Josep Maria Royo, *Golpe de Estado en Chad, Africay*, 22 de abril de 2021.

poder político a las autoridades civiles; y el mismo 22 de abril el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves le Brian –cuyo país ha sido un tradicional aliado del Chad de Idriss Déby– reconoció al CMT, argumentando motivos de seguridad excepcionales. Una pléyade de estados, liderados por Francia, así como la UA y la ONU lamentaron la muerte de Déby y le atribuyeron ser uno los pilares en la construcción de la arquitectura de la paz y la seguridad en el continente y, en especial, en el Sahel y un aliado clave en sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. El propio Déby había llegado al poder en 1990 al frente de una rebelión armada que derrocó al anterior presidente, Hissène Habré.

La muerte de Déby coincidió con la publicación de los resultados provisionales de los comicios en los que Idriss Déby había sido reelegido en su cargo para un sexto mandato, tras ganar con un 79,32% de los votos las elecciones celebradas el 11 de abril. Estas elecciones habían transcurrido en medio de un clima de represión y persecución política de la oposición, de activistas y de defensores de los derechos humanos y habían sido boicoteadas por parte de varios opositores, entre ellos el histórico líder Saleh Kebzabo, por el clima de inseguridad contra sus actos de campaña y manifestaciones que reclamaban una transición pacífica y democrática. El mismo Succès Masra, el líder del emergente partido opositor Les Transformateurs, cuya candidatura había sido rechazada por el Tribunal Supremo, había pedido el aplazamiento electoral para facilitar el necesario diálogo político. En este sentido, numerosos actores de la sociedad civil, entre ellos diversos partidos opositores, sindicatos y grupos de jóvenes habían lanzado la campaña “Wakit Tama” (Ahora es el momento) contra el sexto mandato de Déby. El domicilio del candidato opositor Yaya Dillo Djerou, antiguo líder rebelde y sobrino de Idriss Déby, había sido atacado en febrero por los cuerpos de seguridad. De la misma etnia que el presidente –la comunidad zaghawa, un 4% de la población, tiene el control de un Ejército poco cohesionado y afectado por tensiones comunitarias (equilibrios étnicos en el seno del Ejército), así como por problemas de indisciplina y falta de profesionalidad, tal y como señalaba en enero el International Crisis Group<sup>20</sup>– se había permitido criticar y acusar de corrupción y malversación a la esposa del presidente, Hinda Déby Itno, y su entorno.

En las semanas siguientes, numerosas voces de la comunidad internacional hicieron llamamientos al diálogo, como el Consejo de Paz y Seguridad de la UA el 14 de mayo, que pidió una transición liderada por civiles y que esta no se prolongara más allá de los 18 meses, además de la celebración de un diálogo nacional

inclusivo. El 4 de junio la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) adoptó la Declaración de Brazzaville, instando a los actores chadianos a promover el diálogo y la reconciliación y al CMT a organizar las elecciones en un plazo de 18 meses. Aunque en un primer momento se produjo una oleada de represión y persecución de la oposición política y social, así como de las movilizaciones y actos en contra del golpe de Estado y del CMT, con numerosos arrestos y heridos en las movilizaciones, posteriormente las autoridades de transición llevaron a cabo una limitada apertura del espacio político. Así mismo, diferentes voces del mundo político y social del país hicieron llamamientos a promover un diálogo inclusivo, y las autoridades de transición manifestaron su disposición a llevarlo a cabo. En los siguientes meses las autoridades de transición llevaron a cabo pasos para celebrar un diálogo nacional, y se estableció en julio el Comité Organizador para el Diálogo Nacional Inclusivo (CODNI). No obstante, los desacuerdos en torno a los integrantes del CODNI, a la inclusividad del diálogo nacional, a la injerencia del CMT, a la participación de las diferentes insurgencias o a la agenda de temas del mismo diálogo, entre otras cuestiones, retrasaron su celebración, ya prevista para 2022. En agosto el presidente del CMT, Mahamat Déby, hizo un llamamiento a los diferentes grupos armados (FACT, UFR, CCMSR) a unirse al proceso de diálogo. En noviembre anunció una amnistía general a la oposición armada y política de cara a facilitar su participación en el diálogo nacional, lo que propició que en diciembre diversas figuras opositoras civiles y armadas anunciaran su voluntad de participar en el diálogo nacional. Varios actores clave acordaron participar en el proceso, y se produjeron reuniones entre representantes de la insurgencia chadiana y el Gobierno chadiano en Egipto y Francia. El presidente de transición, Mahamat Déby, el 30 de diciembre promulgó leyes de amnistía que abarcaban a más de 300 opositores y rebeldes.

**La situación en Chad se deterioró como consecuencia de la muerte del presidente Idriss Déby y la toma del poder por parte de una junta militar suplantando al gobierno vigente, lo que supuso un golpe de Estado**

RDC	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno liderado por la coalición Union Sacrée (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del ex presidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social

20. International Crisis Group, *Les défis de l'Armée Tchadienne*, ICG, 22 de enero de 2021.

---

### Síntesis:

RDC vive inmersa en un ciclo de inestabilidad y violencia que tiene sus orígenes en la época colonial bajo la tutela primero del rey belga Leopoldo II y posteriormente de Bélgica. El país no escapó de las dinámicas internacionales de la Guerra Fría por lo que la crisis persistió tras su independencia en 1965, a partir del golpe de Estado y posterior dictadura de Mobutu Sese Seko (1965-1997). Se vio afectado también por las dinámicas regionales de conflicto en los países vecinos durante los años ochenta y noventa, en especial el genocidio de Ruanda de 1994 y su injerencia en RDC. La rebelión con apoyo ruandés de 1996 contra el régimen de Mobutu condujo a la caída del régimen en 1997, seguida por la “primera guerra mundial africana” (1998-2003) en la que participaron una decena de países de la región.<sup>21</sup> La transición entre 2003 y 2006 contribuyó a afianzar en el poder a Joseph Kabila, que mediante el control del aparato del Estado, fraude e irregularidades en las elecciones de 2006 y 2011, consiguió prolongar su mandato de 2016 (cuando debía celebrarse un nuevo proceso electoral) a 2018. En la profunda y persistente crisis que afecta al país confluyen las promesas frustradas de democratización, un elevado clima de corrupción y clientelismo, la pobreza omnipresente y la violencia crónica, y el control del Gobierno se ejerce a través del a menudo recurrente uso excesivo de la fuerza y de graves vulneraciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. En 2018 se celebraron nuevas elecciones que significaron la primera transición pacífica en el país y comportaron la controvertida subida al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor Étienne Tshisekedi, mediante una frágil coalición en la que los partidarios de Joseph Kabila (la coalición FCC) siguieron ejerciendo su determinante influencia. Este clima de inestabilidad política convive con la persistencia del conflicto en el este de RDC, atravesado por dinámicas locales, regionales e internacionales. La coalición colapsó a finales de 2020 abriendo una nueva etapa de cambio a la vez que persistió la inestabilidad política y la violencia en el este del país.

---

**La RDC siguió afectada por un clima de violencia e inestabilidad política derivada de las tensiones en el seno de la nueva coalición gubernamental y por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.** A esto se sumó la persistente inestabilidad y violencia como consecuencia de las acciones de los numerosos grupos armados en el este del país así como de las operaciones contrainsurgentes por parte de los cuerpos de seguridad, situación agravada a partir del establecimiento del estado de sitio en las provincias del este.<sup>22</sup> El Gobierno de coalición surgido de las controvertidas elecciones de 2018 y liderado por Félix Tshisekedi se había visto afectado por numerosas tensiones y obstáculos que le condujeron a la ruptura a finales de 2020. Esto le llevó a la formación de una nueva coalición gubernamental a la que sumó a antiguos aliados de Kabila entre finales de 2020 y principios de 2021, ya que el Tribunal Constitucional permitió a los parlamentarios abandonar sus antiguos grupos políticos y unirse a nuevas alianzas sin el riesgo de ser expulsados por sus partidos originales y, en consecuencia, perder sus escaños. De esta manera, Tshisekedi convenció a numerosos diputados de la coalición de Kabila, el FCC, para que se unieran a la

nueva mayoría, la Unión Sagrada (Union Sacrée), junto con los pesos pesados de la oposición Moïse Katumbi y Jean-Pierre Bemba. Tshisekedi se aseguró a principios de 2021 una serie de victorias políticas adicionales sobre Kabila, cambiando el equilibrio de poder a su favor.

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, los diputados de la nueva mayoría de gobierno sustituyeron por mociones sucesivas a los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, así como al primer ministro Ilunga y su gobierno. El 15 de febrero, tras las negociaciones entre diferentes facciones de la Unión, Tshisekedi nombró a Jean-Michel Sama Lukonde nuevo primer ministro. Originario de Grand Katanga y ex director ejecutivo de la empresa minera más grande del país, Gécamines, Lukonde pertenecía a un pequeño partido político sin un solo escaño en la Asamblea Nacional, llamado Avenir du Congo. Lukonde no tenía ninguna influencia política real ni ambiciones para las elecciones de 2023, lo que le convertía en un aliado durante los dos últimos años de la presidencia de Tshisekedi, según analistas. Después de dos meses de disputas en torno a los puestos ministeriales dentro de la nueva mayoría, el gobierno de 57 miembros apenas se redujo con respecto al de su predecesor. Sin embargo, un 80% de sus ministros eran nuevos, a diferencia del gobierno anterior, donde algunos ministros ya habían servido bajo los gobiernos de Laurent y Joseph Kabila, e incluso durante la dictadura de Mobutu Sese Seko. Tshisekedi trató de controlar las diversas fuerzas dentro de su nueva coalición. Las difíciles negociaciones para formar el Gobierno de la Unión Sagrada pusieron de manifiesto la precariedad de una mayoría que se unió para desplazar a Kabila pero que carecía de una agenda política compartida, según analistas. Las fisuras empezaron a aparecer en la coalición casi tan pronto como se proclamó el gobierno el 12 de abril. Casi 200 de los diputados que habían desertado del FCC de Kabila formaron una “coalición de diputados revolucionarios” para protestar por el desequilibrio en el nuevo gobierno. Algunas provincias tenían varios ministerios; otras no tenían ninguno. Esta coalición acusó a Lukonde de no haber recompensado su “cambio de lealtad” con un cargo en el gobierno, y amenazó con bloquear la investidura del gobierno de Lukonde. El 26 de abril, después de que el primer ministro y Tshisekedi se reunieran con los diputados, la Asamblea Nacional expresó su confianza en el nuevo gobierno y aprobó su programa. A pesar de los cambios y limitados avances en el ámbito político en lo concerniente a la mejora de la gobernabilidad y el respeto por los derechos humanos, persistió la violencia y la inseguridad en el este, que en algunos momentos se vio agravada por las movilizaciones sociales en el este que exigían una mejora de la situación de seguridad, así como el fin del estado de emergencia. Estas fueron reprimidas con dureza por los cuerpos de seguridad, causando diversas víctimas mortales durante el año.

---

21. Véase la síntesis de RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

22. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Además, la fragilidad de la coalición Unión Sagrada y las acusaciones hacia Tshisekedi de intentar perpetuarse en el poder se evidenciaron con los preparativos de las elecciones de 2023, a través de la ley aprobada el 3 de julio que establece la organización y funcionamiento de la comisión electoral independiente (CENI), con dos tercios de sus miembros procedentes de los partidos políticos, al igual que su predecesora. La oposición y líderes religiosos habían llamado a despolitizar la CENI conformándola con miembros de la sociedad civil y expertos electorales. El nombramiento en agosto del aliado de Tshisekedi, el experto electoral Denis Kadima, al frente de la CENI provocó el rechazo de la oposición liderada por Lamuka y de varios partidos de la coalición en el poder, así como de las organizaciones religiosas, en especial la Iglesia Católica, y otros sectores de la sociedad civil. A pesar de ello, en octubre fue constituida la CENI con Kadima al frente. La decisión fue boicoteada por la oposición que se negó a enviar a sus delegados, y en noviembre se organizaron diversas movilizaciones de la oposición y líderes religiosos de rechazo a su nombramiento y demandando la neutralidad de la CENI, en las que se produjeron detenciones de activistas. Por otra parte, la introducción de la controvertida ley de nacionalidad en julio, que prohibía el derecho a votar a cualquier ciudadano con un progenitor no congolés, provocó el rechazo a nivel local e internacional. Entre otros, el arzobispo de Kinshasa la denunció como un instrumento de exclusión y división, el jefe de la misión de la ONU en el país alertó ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las potenciales peligrosas consecuencias de un debate divisivo en torno a la nacionalidad. El líder del partido Juntos por la República, Moïse Katumbi, miembro de la coalición en el poder, cuyo padre es de origen griego, denunció un intento de excluirle como candidato. En paralelo, el Tribunal de Casación ordenó la salida de prisión de Vital Kamerhe por motivos médicos, quien había sido sentenciado por corrupción y malversación de fondos dentro del Gobierno de Tshisekedi. Su partido, la UNC, había calificado su encarcelamiento como motivado políticamente para apartarle del poder, y su liberación podría estar también motivada políticamente con el objetivo de preparar alianzas de cara a las elecciones nacionales de 2023, según analistas.

Sudán	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social
<b>Síntesis:</b>	Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régi

men autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que, a principios de 2019 conllevaron la caída del régimen de al-Bashir y la apertura de un proceso de transición.

**El año estuvo marcado por una nueva crisis política nacional debido al incremento de las tensiones sociales, así como a las tensiones entre la parte civil y la parte militar del Gobierno de Transición, lo que derivó en un nuevo golpe de Estado, abriendo un proceso de movilizaciones populares en todo el país que fueron duramente reprimidas.** Durante el año, el país siguió afrontando una importante crisis económica que se vio acrecentada por el aumento de precios de productos básicos debido a la aplicación de políticas de ajuste estructural recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, todo lo cual derivó en importantes manifestaciones de protesta en varios puntos del país. El 10 de mayo el FMI anunció un plan de financiación al país para liquidar su deuda con el organismo, que incluía, como contrapartida, la adopción de diferentes medidas, entre ellas el fin de los subsidios a los combustibles, lo que provocó un fuerte aumento de los precios. Este hecho generó movilizaciones y protestas ciudadanas contra el Gobierno en Jartum en el mes de junio, exigiendo la dimisión del ejecutivo. De forma paralela a la crisis social, en junio también se produjo un aumento de la tensión política entre los componentes civiles y militares del Gobierno de Transición, debido a la negativa de la parte militar del Gobierno y de las Fuerzas de Apoyo Rápido –RSF, por sus siglas en inglés– de integrar estas últimas al Ejército nacional, tal y como lo estipula la reforma del sector de seguridad prevista en el acuerdo de paz de octubre de 2020. La crisis en el Gobierno derivó en **un intento de golpe de Estado fallido el 21 de septiembre, que sirvió como preámbulo de un nuevo golpe militar el 25 de octubre, que derrocó a la parte civil del Gobierno.** El golpe frustrado de septiembre había generado que la parte civil del ejecutivo insistiese en la necesidad de reformar el aparato militar y de seguridad, mientras que la parte militar, encabezada por el presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fattah al-Burhan, y su adjunto, el general Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti” –comandante de las fuerzas paramilitares de las RSF– acusó a la parte civil de intentar generar las condiciones para desestabilizar el país, tensión que fue seguida del nuevo golpe de Estado en octubre. El 25 de octubre al-Burhan declaró el estado de emergencia, disolvió el Consejo Soberano

y el Gobierno de Transición, así como detuvo al Primer Ministro, varios ministros, funcionarios y dirigentes políticos civiles. También supuso la disolución del Consejo Legislativo de Transición –que aún no se había formado–, la destitución de los gobernadores de los estados, y la restauración de un Consejo Militar de Transición, entre otros. El golpe generó la condena de la comunidad internacional, que presionó para la vuelta al orden constitucional. El 27 de octubre la UA suspendió a Sudán del organismo, mientras que el Banco Mundial suspendió sus ayudas al país. A nivel interno, el golpe generó múltiples manifestaciones y protestas de condena en varios puntos del país que fueron durante reprimidas por las fuerzas de seguridad.

**La parte militar del Gobierno de Transición de Sudán llevó a cabo un nuevo golpe de Estado**

Durante las semanas posteriores se puso en marcha un diálogo entre la Junta Militar, la parte civil derrocada del Gobierno, y otros actores políticos para buscar una solución pacífica y negociada a la crisis. El 11 de noviembre, Al-Burhan anunció la formación de un Consejo Soberano reconstituido en el que él ocuparía la Presidencia y Hamdan Dagalo la Vicepresidencia. Además, se mantenían los mismos representantes de los militares y de la coalición de grupos rebeldes Sudan Revolutionary Front (SRF) que había en el Consejo disuelto, aunque los miembros civiles fueron reemplazados. Como resultado del golpe se produjo una importante fragmentación del componente civil del Gobierno de Transición, la llamada coalición de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC). Las presiones internas y externas lograron que el 21 de noviembre se anunciara un acuerdo político en el país que **restableció en el Gobierno al primer ministro civil Hamdok, aunque consolidó el control militar sobre el Gobierno**. Si bien la comunidad internacional dio la bienvenida a la medida, a nivel interno generó resistencias. Varios partidos políticos sudaneses, organizaciones armadas y la sociedad civil, incluido el FFC, condenaron el intento de legitimar el golpe y exigieron la salida de los golpistas del Gobierno, así como 12 ministros del FFC dimitieron del Ejecutivo. El acuerdo también dio lugar a una importante movilización popular contra el mismo en varios puntos del país, así como a la puesta en marcha de una campaña de desobediencia civil, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad hasta finalizar el año. En medio del creciente clima de descontento popular, el reinstalado primer ministro Hamdok reemplazó a la mayoría de los viceministros interinos y a todos los gobernadores estatales en funciones designados por militares desde el golpe, en un intento por volver a formar un gobierno propio. Sin embargo, las tensiones con la parte militar del gobierno se mantuvieron, aumentando a finales de año los rumores sobre una posible dimisión de Hamdok.

Finalmente, en otros aspectos destacados durante el año en el país, en el asunto relativo a la Gran Represa del Renacimiento Etíope, no se lograron avances significativos en las conversaciones entre Sudán, Etiopía

y Egipto, en parte debido al aumento de las tensiones entre Sudán y Etiopía que derivaron en choques armados entre sus ejércitos a lo largo de la frontera compartida.

Por otro lado, a principios de año el Gobierno sudanés derogó oficialmente la ley de boicot a Israel, allanando el camino para la normalización de las relaciones entre los dos Estados. Este hecho se desarrolló como parte del acuerdo que el país había alcanzado en enero con EEUU, que incluía un préstamo estadounidense para liquidar atrasos en los pagos de la deuda sudanesa con el Banco Mundial.

**Norte de África - Magreb**

Argelia	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Gobierno, Sistema Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, grupos armados AQMI (ex GSPC), Jund al-Khilafa (filial ISIS)

**Síntesis:**

En la presidencia de Argelia sin contestación desde 1999, Abdelaziz Bouteflika se había mantenido en el cargo a pesar de padecer una grave enfermedad que le había supuesto estar al margen de la escena pública desde 2013. Una opaca coalición de figuras políticas y militares ha mantenido las riendas del poder en las sombras, identificada popularmente entre la población argelina como “le pouvoir”. En 2019 el anuncio de que Bouteflika (82 años) se presentaría a un quinto mandato alentó masivas movilizaciones populares de una intensidad no registrada desde la independencia del país en 1962. La presión popular forzó su dimisión y, desde entonces, el poder militar ha intentado controlar la transición y ha promovido medidas como la persecución y arresto de algunas figuras asociadas al antiguo régimen. El movimiento de protesta pacífico Hirak ha persistido en sus movilizaciones contra la corrupción, la influencia del poder militar sobre la política y contra la clase dirigente en general, insistiendo en sus demandas de cambio a un sistema genuinamente democrático capaz de impulsar reformas políticas, sociales y económicas. Paralelamente, Argelia continúa siendo escenario de incidentes esporádicos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados de línea yihadista, principalmente al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) –ex Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GPSC)– que en los últimos años ha centrado sus actividades en países del Sahel.

A lo largo de 2021 Argelia continuó siendo un escenario de tensión de múltiples dimensiones. Dos años después de las masivas protestas que derivaron en la salida de Abdelaziz Bouteflika tras décadas en el poder, persistió la contestación popular y la demanda de reformas; así como las acusaciones contra las autoridades por persecución a la disidencia. Ante el movimiento de protesta que continuó demandando un cambio de régimen y el fin del dominio militar en la políti-

ca argelina, las autoridades reaccionaron con intentos de cooptación, señalando las divisiones de las fuerzas opositoras y con medidas represivas. ONG locales e internacionales denunciaron el cierre de entidades y la detención de manifestantes, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos críticos con el régimen. Algunas de estas voces fueron condenadas a prisión por cargos como “ofensas al presidente”, “insultos a instituciones del Estado” o “circular publicaciones que afectan el orden público”. La organización argelina Comité Nacional por la Liberación de Detenidos (CNLD) documentó la detención de más de 230 personas por motivos políticos en 2021. La mayoría de las personas presas de conciencia estaban vinculadas al movimiento opositor Hirak, que reivindicó la liberación de presos políticos en sus periódicas manifestaciones. En junio el presidente, Abdelmadjid Tebboune, aprobó un decreto que amplió la definición de “actos de terrorismo”. La norma cataloga como tales las acciones que tienen por objetivo la seguridad del Estado, la unidad nacional o la estabilidad y el normal funcionamiento de las instituciones; las acciones o incitaciones que buscan cambiar el sistema de gobernanza por medios no constitucionales o socavar la integridad del territorio nacional. Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el posible uso de la norma para perseguir a activistas opositores y grupos políticos que desean un cambio de régimen.<sup>23</sup>

Durante 2021 también se amplió la persecución a la formación opositora Rachad –en la que participan antiguos miembros del Frente Islámico de Salvación (FIS)– y al Movimiento por la Autodeterminación de la Kabilia (MAK). En mayo, ambas entidades fueron declaradas como “organizaciones terroristas” por el Alto Consejo de Seguridad, después de que el Gobierno anunciara el desmantelamiento de una célula del MAK que presuntamente preparaba un ataque durante manifestaciones de Hirak. Tanto Rachad –creado en 2017–, como MAK –formado en 2001 con la intención de buscar la autonomía y posterior independencia de Kabylia– declaran buscar sus objetivos por vías pacíficas y niegan estar involucrados en hechos de violencia. En los meses siguientes fueron detenidas decenas de personas, incluyendo varios periodistas, por sus presuntos vínculos con estas organizaciones. En agosto, tras unos devastadores incendios que provocaron la muerte a 90 personas (al menos 57 civiles y 33 soldados) en la provincia de Tizi Ouzu (Kabylia), la oficina de Tebboune responsabilizó a Rachad y a MAK, y acusó a Marruecos de dar apoyo a este último grupo. Días después el Gobierno argelino rompió relaciones diplomáticas con Rabat acusándole de “acciones hostiles”, en medio de una creciente tensión bilateral que en 2021 se vio influida por la cuestión del Sáhara

Occidental, pero también por otras variables (sospechas de espionaje a Argelia por parte de Marruecos, gestión de los hidrocarburos en el norte de África, incidentes de seguridad).<sup>24</sup> En el plano político, cabe destacar que en febrero Tebboune anunció elecciones legislativas anticipadas y remodeló parcialmente su gobierno, aunque mantuvo en sus cargos a algunas figuras destacadas en la persecución al movimiento Hirak. La represión al movimiento de contestación se intensificó en vísperas de los comicios, que se celebraron en junio en medio de llamamientos al boicot y que contaron con la menor tasa de participación desde la independencia del país. Tras las elecciones Tebboune volvió a reformar parcialmente su gobierno y concedió perdones y amnistías a más de un centenar de integrantes de Hirak encarcelados. Las elecciones locales de noviembre también tuvieron una baja participación, de 35% y arrojaron una estrecha victoria del partido oficialista. En paralelo, cabe destacar que en 2021 continuaron registrándose algunos incidentes esporádicos que involucraron a las fuerzas de seguridad y a presuntos miembros de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). El más destacado tuvo lugar en enero, en la región de Tipaza (oeste de Argel), cuando una operación militar resultó en la muerte de seis presuntos combatientes del grupo armado. Según los datos del centro de estudios ACLED, un total de 22 personas murieron en enfrentamientos y a causa de explosivos en Argelia en 2021. El balance oficial del Ministerio de Defensa argelino, en tanto, informó de nueve fallecidos, seis rendiciones, la “neutralización” de más de 200 personas vinculadas a grupos considerados terroristas, además del decomiso de armas, municiones y explosivos.<sup>25</sup>

Marruecos-Sáhara Occidental	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional <sup>26</sup>
<b>Actores:</b>	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO
<b>Síntesis:</b>	
Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y lanzó una campa-	

23. Human Rights Watch, “Algeria: Events of 2021”, *HRW World Report 2022*, enero de 2022.

24. Véase el resumen sobre Marruecos-Sáhara Occidental en este capítulo.

25. People’s Democratic Republic of Argelia – Ministry of National Defence, *PNA operational report for the year 2021*, 1 de enero de 2022.

26. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

---

ña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

---

La tensión en torno a la cuestión del Sáhara Occidental continuó intensificándose a lo largo de 2021, en un contexto marcado por el fin del cese el fuego el año anterior, un persistente bloqueo del proceso negociador auspiciado por la ONU,<sup>27</sup> un agravamiento en el histórico pulso entre Marruecos y Argelia, diversos hechos que evidenciaron los ecos internacionales de la disputa y un incremento de la represión en los territorios saharauis ocupados por Rabat, entre otros factores. Tras los incidentes en Guerguerat en noviembre de 2020 y la decisión del Frente POLISARIO de abandonar el alto el fuego vigente desde 1991, durante el año se produjeron diversos hechos violentos, aunque su alcance es complejo de precisar por las versiones contradictorias entre las fuentes. Pese a ello, **algunas estimaciones apuntan a una treintena de personas fallecidas en las hostilidades**. El informe del secretario general de la ONU sobre el Sáhara Occidental constató el significativo deterioro de la situación y destacó los relatos antagónicos de las partes, ya que mientras el Frente POLISARIO considera todo el territorio en zona de guerra, Marruecos insiste en la ausencia de conflicto armado. La misión de la ONU, MINURSO, no pudo verificar en terreno la gran mayoría de los incidentes.<sup>28</sup> En 2021 el Frente POLISARIO continuó atacando posiciones militares marroquíes a lo largo de la barrera que separa el territorio saharauí controlado por Marruecos del que está bajo administración de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Rabat reconoció que entre noviembre de 2020 y agosto de 2021 se habían registrado más de un millar de ofensivas a distancia cerca de la berma, 83% en la zona de Mahbas. En febrero, y por primera vez desde la tregua vigente en la zona durante tres décadas, el Frente POLISARIO aseguró que había dado muerte a tres soldados marroquíes en la zona de Ouarkiz, aunque Rabat negó este hecho y lo calificó como propaganda de guerra. En abril informaciones de prensa apuntaron que Marruecos había utilizado por primera vez aviones no tripulados en una ofensiva en la zona del Sáhara Occidental –concretamente en Tifariti, en el área de separación– provocando la muerte de un dirigente militar del Frente POLISARIO. Los incidentes más graves se produjeron al finalizar el año, a mediados de noviembre, cuando otro ataque aéreo marroquí habría causado la muerte de 11 civiles en Miyek, área bajo control de la RASD. Días antes, el 3 de noviembre,

Argelia había responsabilizado a Marruecos por la muerte de tres camioneros argelinos en otro ataque con dron en el área del Sáhara Occidental controlada por el Frente POLISARIO. Argel calificó la acción de “terrorista” y advirtió sobre represalias.

Este último incidente agravó las tensiones entre Argel y Rabat, cuyas relaciones sufrieron un grave deterioro en 2021 y motivaron la crisis bilateral más grave desde 1994, según analistas. **A finales de agosto, Argelia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos denunciando una serie de “actos hostiles” del vecino país, entre ellos sus políticas en el Sáhara Occidental.** Las relaciones ya se habían tensionado en 2020 tras el fin del alto el fuego y por el apoyo del Gobierno de Donald Trump a las reivindicaciones marroquíes sobre el Sáhara a cambio del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel. A principios de 2021 Argelia realizó maniobras militares de gran escala en Tindouf, cerca de la frontera con Marruecos, en una acción que fue interpretada como una advertencia a que Rabat no incursionara en su territorio. La tensión bilateral también se intensificó por las declaraciones de Rabat en una reunión de la ONU sobre las reivindicaciones de pueblos de la región argelina de Kabylia –Argel acusó a Marruecos de apoyar a dos grupos que señala como “terroristas”, el Movimiento por la Autodeterminación de Kabylia (MAK) y a RACHAD–; por las informaciones del “escándalo Pegasus” –según las cuales Marruecos usó el programa de espionaje israelí para interceptar comunicaciones de miles de argelinos, incluyendo altos cargos políticos y militares– y por disputas vinculadas a los flujos de hidrocarburos desde el norte de África a Europa. En este contexto, las autoridades argelinas intensificaron la vigilancia de la frontera occidental y, en septiembre, anunciaron el cierre del espacio aéreo a todas las aeronaves marroquíes, tanto civiles como militares.

El apoyo de EEUU a la posición marroquí –que no fue revertido por el nuevo Gobierno de Joe Biden– motivó que Marruecos mantuviera una actitud internacional más desafiante e intensificara la presión para que otros países se pronunciaran sobre la cuestión saharauí.<sup>29</sup> En este contexto, Rabat protagonizó tensiones diplomáticas con Alemania por la decisión de Berlín de promover una reunión sobre la cuestión saharauí en el Consejo de Seguridad de la ONU a finales de 2020 y también con España. En represalia por la entrada del líder del Frente POLISARIO Brahim Ghali para ser tratado por COVID-19 en territorio español, Marruecos permitió la entrada en mayo de más de 9.000 personas migrantes y refugiadas en Ceuta. La crisis motivó críticas a Marruecos por instrumentalizar la cuestión migratoria, pero también puso en evidencia las consecuencias de las políticas europeas de externalización y militarización de fronteras. Más tarde, **en septiembre, la Corte Europea**

---

27. Véase el resumen sobre Marruecos-Sáhara Occidental en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

28. UNSC, *Informe del secretario general de la ONU sobre el Sáhara Occidental*, S/2021/843, 1 de octubre de 2021.

29. International Crisis Group, *Relaunching Negotiations Over Western Sahara*, Middle East and North Africa Report no.227, 14 de octubre de 2021.

**de Justicia volvió a rechazar –por quinta vez– el acuerdo agrícola y pesquero de la UE con Marruecos por incluir territorios del Sáhara Occidental.** En contraste, en 2021 nuevos países –Jordania, Senegal, Malawi, Sierra Leona y Surinam– se sumaron a la lista de Estados que anunciaron o abrieron sedes diplomáticas en el territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en medio de las críticas del Frente POLISARIO. La Liga Árabe dispuso el uso de mapas de Marruecos que incluyeran el Sáhara Occidental en actos oficiales de la organización, motivando el rechazo de Argelia.

En materia de derechos humanos, la oficina de la alta comisionada de la ONU –que continuó sin poder verificar la situación en terreno– y otras organizaciones expresaron su **preocupación por los reportes sobre la intensificación de las restricciones impuestas por Marruecos desde noviembre de 2020 a las libertades de expresión, manifestación y asociación en el Sáhara Occidental y sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes** en la dispersión de protestas, rastreos, detenciones arbitrarias e intimidaciones a activistas pro-independencia y defensores de derechos humanos, entre otros hechos.<sup>30</sup> Medios de prensa y entidades como Human Rights Watch destacaron el acoso y agresiones a activistas como Sultana Khaya y Hassana Duihi.<sup>31</sup> Finalmente, cabe mencionar que, al finalizar el año, el nombramiento del diplomático sueco italiano Staffan de Mistura como nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental generó ciertas expectativas de reanudar el proceso negociador bajo los auspicios de la ONU.

Túnez	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno, Sistema Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba ibn Nafi o Brigadas Oqba ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS

#### Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el

estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

#### Durante 2021 Túnez vivió la mayor crisis desde el derrocamiento del régimen de Zine el Abidine Ben Alí en 2011,

en un contexto marcado por una significativa concentración de poder por parte del presidente, tensiones políticas, una creciente polarización, denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos y una grave crisis económica agravada por el impacto de la pandemia de COVID-19. Durante el primer semestre del año continuaron las periódicas movilizaciones por el deterioro de las condiciones económicas y sociales en distintos puntos del país. Los enfrentamientos con la Policía y la represión de estas protestas por parte de las fuerzas de seguridad derivaron en la muerte de al menos tres manifestantes en incidentes ocurridos en las localidades de Sbeitla, Sfax y Sidi Hassine. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos alertaron sobre el excesivo uso de la violencia para sofocar las protestas y el arresto de centenares de personas y también se produjeron manifestaciones para denunciar la violencia policial. En paralelo, durante los primeros meses del año se agudizó el bloqueo político y el pulso de poder entre el presidente Kais Saïed y el primer ministro Hichem Mechichi. En enero Mechichi remodeló su gabinete y destituyó a varios ministros, incluyendo al del Interior –un cercano aliado de Saïed–, tras lo cual el presidente se negó a ratificar a los nuevos miembros del Gobierno. En los meses siguientes la disputa también incluyó una pugna sobre quién detentaba la autoridad sobre las fuerzas de seguridad. En abril, Saïed también se negó a ratificar los cambios promovidos por el Parlamento para rebajar la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar los integrantes de la Corte Constitucional, concebida como un ente independiente para velar por el respeto a la Carta Magna y que no ha podido conformarse desde la adopción de la nueva Constitución en 2014. El presidente también desestimó los llamamientos de algunos actores, incluyendo el poderoso sindicato UGTT, a un diálogo nacional.

En este contexto de bloqueo político y en medio de un creciente descontento social con el manejo de las autoridades de la crisis económica y de salud en el país –con una de las peores tasas de mortalidad por COVID-19 en África y un bajísimo nivel de vacunación (7% de la población)–, el 24 de julio el presidente extendió hasta principios de 2022 el estado de

30. UNSC, *Informe del secretario general de la ONU sobre el Sáhara Occidental*, S/2021/843, 1 de octubre de 2021.

31. Human Rights Watch, “Morocco: Events of 2021”, *HRW World Report 2022*, enero de 2022.

emergencia y un día más tarde invocó el artículo 80 de la Constitución para arrogarse poderes excepcionales. **Saïed destituyó al primer ministro, suspendió el Parlamento, retiró la inmunidad a los integrantes del legislativo, removió a numerosos altos cargos y asumió la supervisión de la oficina del fiscal general.** Las medidas del presidente motivaron manifestaciones de apoyo que congregaron a decenas de miles de personas y concitaron el respaldo de algunos sectores, mientras que otros, como el partido islamista Ennahda, denunciaron su intervención como un golpe de Estado. En las semanas siguientes, nuevas medidas anunciadas por Saïed apuntaron a consolidar su dominio de la escena política tunecina. La suspensión del Parlamento fue extendida de manera indefinida, el mandatario asumió poderes para gobernar por decreto y designó un nuevo gabinete encabezado por Najla Bouden Romdhane, una geofísica sin perfil político previo que se convirtió en la primera mujer tunecina en ocupar este cargo. A nivel local, se fue ampliando la oposición de actores políticos y sociales a la deriva de Saïed y a partir de septiembre se iniciaron manifestaciones contra el mandatario. En los meses siguientes se produjeron periódicas movilizaciones a favor y en contra del presidente. A nivel internacional, las acciones de Saïed recibieron el apoyo de países como Egipto, mientras que otros actores, como los países del G7 o la UE, hicieron llamamientos a restablecer el orden constitucional. En medio de interpelaciones de actores locales e internacionales a Saïed para que definiera un cronograma y pusiera fin al estado de excepción, el presidente tunecino anunció en diciembre una hoja de ruta. Esta contempla una consulta online sobre reformas políticas y constitucionales a partir de enero de 2022, una revisión y resumen de las propuestas por un comité de expertos en marzo, un referéndum sobre las modificaciones propuestas en julio y la celebración de elecciones en diciembre de 2022. El anuncio –que supone la extensión por un año del estado de emergencia y de la suspensión del Parlamento y que otorga un mayor poder a Saïed en un momento clave de reforma política– fue ampliamente criticado por las fuerzas políticas opositoras –divididas entre sectores islamistas y no islamistas– y por actores sociales como la UGTT, que cuestionaron su legalidad y legitimidad. Analistas alertaron sobre la deriva autoritaria en el país norteafricano y sobre los riesgos de la creciente polarización en el país. Organizaciones de derechos humanos también advirtieron sobre el incremento de la represión, la persecución política y los intentos por silenciar a las voces críticas en el país desde julio de 2021. Decenas de personas fueron puestas bajo arresto domiciliario o sometidas a prohibiciones de viajar al exterior, mientras que otras estaban siendo perseguidas en tribunales civiles y militares por acusaciones de insultos al presidente o al Ejército. Tras denunciar las acciones de Saïed como un golpe

*En un contexto de tensiones políticas y grave crisis económica y social, el presidente de Túnez destituyó al primer ministro y decretó la suspensión del Parlamento*

de Estado, el expresidente Moncef Marzouki fue enjuiciado en ausencia y condenado a cuatro años por socavar la seguridad externa del Estado.

Paralelamente, cabe destacar que **durante el año continuaron produciéndose incidentes esporádicos entre las fuerzas de seguridad y presuntos combatientes de inspiración yihadista.** Entre los hechos más destacados, todos ocurridos en la zona fronteriza con Argelia, cabe mencionar la detonación de un artefacto explosivo que provocó la muerte de cuatro soldados en febrero; una acción de las fuerzas de seguridad en la que fallecieron tres supuestos milicianos vinculados al grupo Jund al-Khilafa en abril; y la operación antiterrorista en la que murieron otros cinco presuntos yihadistas en mayo. Según el centro de estudios ACLED, durante 2021 fallecieron 18 personas en Túnez a causa de enfrentamientos y por la detonación de explosivos. Cabe destacar también que más de un año después de la publicación del informe final de la Comisión de Verdad y Dignidad –establecido para investigar los abusos a los derechos humanos cometidos en el país en las últimas cinco décadas–, sus recomendaciones continuaban sin ser implementadas.

### 2.3.2. América

#### América del Norte, Centroamérica y Caribe

Haití	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas

#### Síntesis:

La actual crisis que atraviesa el país, con movilizaciones masivas y numerosos episodios de violencia registrados en 2019, está vinculada con las acusaciones de corrupción, fraude electoral y negligencia en la acción de gobierno del Presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, la situación de parálisis institucional, fragilidad económica y crisis sociopolítica empezó a agudizarse tras la salida forzada del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional y posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH, sustituida por MINUJUSTH en 2017 y por BINUH en 2019) y la mayor implicación y coordinación de la comunidad internacional en la normalización del país han propiciado avances en determinados ámbitos de la gobernabilidad del país, pero no han conseguido lograr una estabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar completamente el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

**En paralelo a un incremento sin precedentes en cuanto a la actividad de las bandas delincuenciales y a un aumento notable en el número de secuestros y homicidios, se agudizó la crisis política, institucional y social que vive el país, especialmente después de que en el mes de julio fuera asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse.** Ya desde principios de año se produjeron protestas masivas alentadas por la oposición, que consideraba que el mandato presidencial de cinco años de Moïse finalizaba el 7 de febrero, acusándole de haber pospuesto las elecciones legislativas para poder gobernar por decreto y de querer instaurar una dictadura en el país. Por su parte, Moïse señalaba que, en tanto en cuanto tomó posesión del cargo en 2017, su mandato finalizaba en febrero de 2022, por lo que propuso un calendario electoral para el 2021 que incluía la celebración de un referéndum constitucional a finales de junio, y de elecciones legislativas, presidenciales, locales y municipales para los meses de septiembre y noviembre. Aunque tanto Naciones Unidas como la OEA validaron el calendario electoral de Moïse, confirmando así que su mandato finalizaba en 2022, a principios de febrero la oposición estableció un gobierno paralelo (con un magistrado de la Corte Suprema como presidente interino) y durante todo el mes se produjeron protestas masivas, en las que varias personas resultaron heridas. A principios de febrero, el Gobierno declaró haber abortado un golpe de Estado y un intento de asesinato contra Moïse, arrestando a 23 personas. En los meses siguientes, Joseph Jouthe dimitió como primer ministro y Claude Joseph fue nombrado en el cargo, el sexto bajo la presidencia de Moïse. Mientras, tanto la UE como el Grupo de Contacto de Haití –conformado por la OEA, Naciones Unidas, EEUU, Francia, Alemania, Canadá, Brasil y España—mostraron su disconformidad con la intención del Gobierno de celebrar el mencionado referéndum constitucional, alegando falta de transparencia y garantías democráticas. El día 7 de julio, Moïse fue asesinado y su mujer herida tras un ataque a la residencia presidencial por parte de un grupo fuertemente armado. En las horas posteriores al ataque, tres de los asaltantes fueron abatidos y otros 20 fueron detenidos, mientras que en los días siguientes se dictaron varias órdenes de arresto contra varias personas acusadas de haber orquestado el ataque. En los días posteriores al magnicidio, en los que se declaró el estado de emergencia y se cerró el principal aeropuerto del país, hubo una cierta confusión institucional y pugna por el poder entre Claude Joseph y Ariel Henry, que había sido nombrado por Moïse como nuevo primer ministro a principios de julio, pero que en el momento del ataque todavía no había jurado ni tomado posesión del cargo. Tras varias semanas de tensión, finalmente Henry asumió como primer ministro y presidente en funciones. En septiembre trascendió que el mismo día del ataque a la residencia presidencial Henry había hablado por teléfono con uno de los principales sospechosos de asesinato de Moïse, por lo que el fiscal general pidió que

***El 7 de julio el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado y su mujer herida tras un ataque a la residencia presidencial por parte de un grupo fuertemente armado***

testificara en la investigación y la Oficina de Protección de la Ciudadanía (OPC), institución homologable al Defensor del Pueblo en otros países, pidió su dimisión. Ante la negativa de Henry, la OPC dijo que Henry suponía un serio obstáculo a la investigación e instó a la Comisión Especial de Investigación de Naciones Unidas que apoyara al juez que investigaba el caso. A mediados de agosto, el magistrado que había sido asignado para la investigación renunció al caso después de que su secretario judicial fuera asesinado. El fiscal general también había sido destituido después de que instara a Henry a declarar. Por su parte, la esposa de Moïse presentó una denuncia contra Henry y otros cargos gubernamentales por participación en el asesinato del expresidente. A finales de año, se habían detenido a unas 40 personas relacionadas con dicho asesinato, pero la investigación no había concluido. En septiembre, después de que el comité encargado de elaborar una nueva Constitución presentara su borrador, el Gobierno señaló que el referéndum se llevaría a cabo en febrero de 2022 y que en los meses posteriores, sin especificar una fecha concreta, se llevarían a cabo los comicios presidenciales, legislativos, regionales y locales.

Por otra parte, el Gobierno, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil señalaron que durante todo el año, pero especialmente tras el asesinato de Moïse, se había producido un incremento sin precedentes en la historia reciente del país en cuanto a la actividad delictiva de las bandas armadas que operan en algunos de los barrios más densamente poblados de Puerto Príncipe y otras ciudades del país. En este sentido, durante todo el año se produjeron movilizaciones e incluso una huelga de alcance nacional para protestar por la situación de inseguridad generalizada. Según datos de Naciones Unidas, hasta el mes de septiembre unas 19.000 personas habían tenido que abandonar sus hogares por la violencia vinculada a dichas bandas, más de 13.000 solamente en el mes de abril. Según el Centro para el Análisis y la Investigación sobre Derechos Humanos, entre enero y septiembre se habían producido más de 600 secuestros para obtener recompensa, una cifra claramente superior a los 231 que se produjeron en el mismo periodo en 2020 o a los 78 del año 2019. Según dicho centro de investigación, el 90% de dichos casos (43% en Puerto Príncipe, 22% en Croix-des Bouquets, 19% en Carrefour; y 16% en Delmas) se concentraron en la región metropolitana del país. Otras organizaciones de la sociedad civil señalaron que los secuestros se habían incrementado en aproximadamente un 150% respecto del año anterior. A modo de ejemplo, el grupo armado 400 Mawozo, que en varias ocasiones secuestró vehículos enteros con todos sus pasajeros, en octubre secuestró a 17 religiosos (16 de ellos de EEUU y uno de Canadá), liberados escalonadamente hasta el mes de diciembre. Aunque no trascendieron cifras sobre el número de homicidios vinculados a la actividad de bandas armadas, se estima

que se han incrementado sustancialmente respecto del año anterior, en el que Naciones Unidas reportó 1.380 asesinatos, un 20% más que en 2019. El Centro para el Análisis y la Investigación sobre Derechos Humanos también señaló que hasta mediados de octubre 37 policías habían sido asesinados, más que los 27 que murieron en todo el 2020. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), en 2021 había unas 90 bandas activas, algunas de las cuales controlan territorios clave para el abastecimiento de la ciudad. A modo de ejemplo, en octubre el Jimmy Chérizier, expolicía y líder de la mayor banda armada del país, G9, declaró su disposición a permitir la distribución de gasolina en Haití si el primer ministro renunciaba. El RNDDH ha documentado una docena de ataques por parte de estos grupos armados en los que han muerto o desaparecido unas 600 personas. Además, organizaciones de derechos humanos han denunciado insistentemente la connivencia entre estas bandas y determinados sectores del Estado, que les proporcionarían armamento e incluso recursos humanos con el objetivo de controlar políticamente y condicionar electoralmente determinados barrios de la región metropolitana. A modo de ejemplo, un informe publicado en abril por parte de la Facultad de Derecho la Universidad de Harvard y el Observatorio Haitiano sobre los Crímenes contra la Humanidad reportó la responsabilidad e implicación del Gobierno a alto nivel en la preparación, ejecución y posterior encubrimiento de tres ataques perpetrados por bandas armadas entre 2018 y 2020 en las que 240 civiles habrían muerto. Un informe publicado por el Gobierno de EEUU en diciembre de 2020 relataba la connivencia entre las bandas armadas y el Ministerio del Interior y determinados diputados del partido de Moïse. Finalmente, cabe destacar que en el mes de agosto un terremoto provocó la muerte de 2.240 personas y la destrucción de decenas de miles de casas.

México	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Gobierno, Recursos Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición

#### Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en

México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

En 2021 se produjo una ligera disminución en cuanto a los homicidios intencionales respecto del año anterior, aunque se incrementaron otras formas de violencia, y siguieron registrándose altos niveles de enfrentamientos entre cárteles de la droga y entre estos y las fuerzas de seguridad del Estado, así como numerosos ataques contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. Según datos revelados por el propio presidente en los primeros días de 2022, **en 2021 se registraron 34.410 homicidios dolosos, una cifra ligeramente inferior a la que se registró en 2020 (34.554) y 2019 (34.690)**. La tasa de homicidios (26 cada 100.000 habitantes) fue la séptima más alta del continente, por detrás de Jamaica, Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, Belice y Colombia. Más del 50% de los homicidios se concentró en los estados de Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, siendo particularmente graves los casos de Guanajuato (19%) y Michoacán (13%). Andrés Manuel López Obrador reconoció la gravedad de la situación (durante su mandato se han registrado 102.654 asesinatos), pero puso en valor que desde su llegada a la presidencia del país en diciembre de 2018 se ha logrado revertir una clara tendencia al alza en el número de asesinatos en los últimos años. **En 2016 el incremento en el número de homicidios respecto del año anterior fue del 26,1%; en 2017 del 28,1%; en 2018 del 16,8%; en 2019 del 2,81; en 2020 se redujo en el 0,4% y en 2021 la disminución fue del 4,16%**. El Gobierno también destacó que se había producido una reducción del 1,3% en la incidencia de los homicidios en los 50 municipios más afectados por la violencia y considerados prioritarios por el Gobierno, y también puso en valor la reducción de la violencia en ciudades tradicionalmente asociadas al crimen, como Tijuana o Ciudad Juárez. Finalmente, el Ejecutivo señaló que en 2021 también se redujeron otras formas de crimen, como los secuestros (un 44,8%) o de los robos (un 25,3%). En cuanto a los feminicidios, estos se incrementaron ligeramente respecto de los años anteriores (1.004 en 2021 en comparación con 978 casos en 2020 y 973 en 2019).

A pesar de la ligera disminución en el número de asesinatos intencionales registrada en 2021, otras formas de violencia y crimen se incrementaron en 2021, como la extorsión (incremento del 12,3%) o las violaciones (21.189 casos, un aumento de 28% respecto de 2020). También se incrementaron los crímenes de tipo político y la violencia contra periodistas y líderes sociales. Respecto de esta última cuestión, **un informe de Reporteros Sin Fronteras presentado a mediados de diciembre declaró que México sigue siendo, por tercer año consecutivo, el país más peligroso y letal para el ejercicio del periodismo**. En 2021 fueron asesinados

cinco periodistas, y 47 en los últimos cinco años. Poco antes, en el mes de octubre, el propio Gobierno señaló que desde el inicio de la actual administración en diciembre de 2018 habían sido asesinadas 94 personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos y 47 periodistas (en este último caso, el 43% de la responsabilidad de tales asesinatos era de funcionarios públicos y el 33% de grupos del crimen organizado). Estas cifras con concordantes con las ofrecidas durante el año por Global Witness, organización según la cual México fue el segundo país del mundo con un mayor número de defensores de la tierra y el medio ambiente (30) asesinadas en 2020. En la misma línea, un informe de la Red TDT presentado en abril señaló que durante el mandato del actual presidente habían sido asesinados 45 activistas sociales, medioambientales y comunitarios. Poco después de la celebración de las elecciones legislativas, regionales y locales el 5 de junio, trascendió que **se habían registrado 102 asesinatos relacionados con los comicios, incluyendo el de 36 personas candidatas.**

**En México se registraron 43.410 homicidios intencionales, una cifra que ha experimentado una leve disminución en los dos últimos años**

Durante el año los niveles de violencia vinculados a los enfrentamientos entre cárteles de la droga o entre éstos y las fuerzas de seguridad del Estado fueron muy altos. La organización Semáforo Delictivo señaló durante el año que el 80% de las muertes violentas en el país estuvieron relacionadas con este tipo de enfrentamientos. En este sentido, algunos de los principales episodios de violencia y masacres que acontecieron durante el año fueron la muerte de 16 personas en enfrentamientos entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos en la frontera entre Michoacán y Jalisco en enero; la muerte de 13 personas en enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) en Guanajuato a principios de enero; la muerte de 11 personas en choques entre el CJNG y la Policía en el mismo estado a mediados de enero; el asesinato de 11 personas en las afueras de Guadalajara a finales de febrero; el asesinato por parte del cártel Familia Michoacana de 13 policías y funcionarios públicos de la fiscalía en el Estado de México a mediados de marzo; los enfrentamientos entre cárteles registrados a finales de junio, que provocaron la muerte de 18 personas en la ciudad fronteriza con EEUU de Reynosa (Tamaulipas) y de otras 18 personas en Zacatecas; la muerte de más de 60 personas por enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa en el estado de Zacatecas en los meses de julio y agosto; la muerte de unas 20 personas en Chihuahua en octubre durante los enfrentamientos entre grupos rivales no identificados; el asesinato de 11 civiles (7 de ellos menores) en la localidad de Tangamandapio (estado de Michoacán) a principios de diciembre; la muerte de 14 personas en Zacatecas en los días 29 y 30 de diciembre; o el uso de drones con explosivos contra civiles por parte del CJNG en su

intento de tomar la ciudad fronteriza entre Michoacán y Jalisco de Tapalcatepec en septiembre o nuevamente en el mes de diciembre en la localidad de Chinicuila (Michoacán), provocando la muerte de numerosas personas y la huida de una parte significativa de dichas localidades. Según la organización Causa en Común, entre enero y octubre de 2021 se hallaron 520 fosas clandestinas con decenas de personas asesinadas, como las que identificaron en Jalisco en el mes de enero con 17 cadáveres; en Guadalajara en el mes de febrero con 18 cuerpos o en Guanajuato en el mes de mayo con otros 26 cadáveres. Dicha organización también denunció que se produjeron 459 masacres y 4.527 atrocidades, que incluyen episodios de extrema crueldad como tortura, mutilación o descuartizamiento.

## América del Sur

Colombia	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social

### Síntesis:

Las movilizaciones multitudinarias registradas en los últimos años están estrechamente vinculadas con el rechazo de una parte de la ciudadanía a la acción de gobierno del presidente Iván Duque, pero también a cuestiones más estructurales del sistema político y el modelo económico que ha regido en el país en las últimas décadas, como las críticas a la corrupción o impunidad judicial, la creciente percepción de que los altos niveles de crecimiento económico que ha experimentado el país no han supuesto una reducción de la desigualdad, la ralentización de la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC o el incremento de los asesinatos contra ex combatientes y líderes sociales. En los últimos años se han producido algunas movilizaciones significativas, como las masivas manifestaciones en contra de un proyecto de reforma de la educación superior en 2011 o bien el llamado Paro Nacional Agrario en 2013. Ya bajo mandato de Iván Duque se incrementaron los indicios de malestar social, como así lo evidenció la celebración de una consulta popular contra la corrupción en agosto de 2018; el llamado Paro Nacional Universitario entre octubre y diciembre de 2018; la denominada “Marcha de las linternas” en enero de 2019 y las posteriores protestas entre abril y mayo de 2019 –en las que cientos de personas resultaron heridas–; o bien las protestas lideradas por el Comité Nacional del Paro en 2020 y 2021, en las que decenas de personas murieron y otras miles resultaron heridas o detenidas.

**Las protestas antigubernamentales que se produjeron casi ininterrumpidamente durante todo el año, especialmente intensas en los meses de abril y mayo,**

**provocaron la muerte de varias decenas de personas y miles de personas heridas, desaparecidas y detenidas.**

Las cifras de mortalidad asociadas a las movilizaciones sociales varían sensiblemente en función de las fuentes.

**El Gobierno reconoció oficialmente que menos de un mes después del inicio de las protestas 47 personas habían muerto y 2.145 habían resultado heridas.**

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo señaló que en las dos primeras semanas de movilizaciones se habían registrado 42 muertes, 41 de ellas de civiles, y 168 casos de desapariciones. Según el Gobierno, hasta finales de mayo se habían producido 4.973 manifestaciones, 1.897 marchas, 2.426 bloqueos, 522 movilizaciones y 1.130 disturbios. Sin embargo, el número de víctimas en el marco de las protestas fue muy superior. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió informaciones sobre 63 muertes entre el 28 de abril y el 31 de julio, de las cuales verificó 46 (de entre estas, 28 habrían sido responsabilidad de la Policía). Human Rights Watch declaró haber recibido 81 denuncias creíbles de muertes ocurridas durante las movilizaciones, mientras que las ONG Temblores e Indepaz reportaron que entre finales de abril y finales de junio el número de víctimas mortales se elevaba a 75, 44 de ellas por presunta autoría de la Fuerza Pública. Además, tales organizaciones reportaron 3.789 casos de violencia policial —incluyendo

28 casos de agresión sexual y 83 lesiones oculares— y 1.264 detenciones arbitrarias. Por su parte, **el Comité Nacional del Paro denunció 77 muertes en el seno de las movilizaciones sociales en Colombia.** Aunque inicialmente las protestas estaban centradas en la oposición a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Iván Duque, también hubo otros focos de descontento, tal y como queda patente en la lista de demandas y propuestas que presentó a principios de mayo el Comité Nacional del Paro, la organización que ha impulsado y convocado las principales movilizaciones que se han producido en Colombia desde el año 2019 contra la Administración Duque (anteriormente, entre octubre y diciembre de 2018, también se registraron importantes movilizaciones sociales conocidas como el Paro Universitario). Entre dichas demandas, cabe destacar la oposición a las reformas de salud y del sistema de pensiones; el incumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 y el incremento de asesinatos de líderes sociales (18 solamente en el mes de julio) y ex combatientes de las FARC (casi 300 desde 2016); la mala gestión de la pandemia (acusaciones de corrupción, incompetencia y falta de recursos); situación económica (la pobreza se incrementó en más del 6% hasta alcanzar el 42% de la población); la discriminación racial y de género o las denuncias de brutalidad policial y demandas de reforma de la Policía.

***El Comité Nacional del Paro denunció 77 muertes en el seno de las movilizaciones sociales que se registraron en Colombia desde el mes de abril***

El inicio de las protestas el 28 de abril en numerosas ciudades del país, especialmente en Cali y otros puntos del Valle del Cauca, motivó el despliegue de la Policía y la declaración del toque de queda en numerosas ciudades. Ante las numerosas voces internacionales que instaron a poner fin a la violencia e iniciar un diálogo para resolver la crisis, a principios de mayo el Gobierno anunció la retirada de la reforma tributaria, la renuncia del ministro y el viceministro de Hacienda y el inicio de negociaciones con el Comité Nacional del Paro y reuniones con 11 sectores políticos, sociales y económicos. **El día 10 de mayo se llevó a cabo la primera reunión entre Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, aunque sin resultados públicos.** En los días siguientes se llevaron a cabo reuniones periódicas hasta el día 23 de mayo, fecha en la que renunció el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. En paralelo, a mediados de mayo el Gobierno autorizó el despliegue de efectivos militares en tareas de apoyo a la Policía.

A finales de mes, unos 7.000 soldados se desplegaron en Cali y el Valle del Cauca poco después de que personas hubieran muerto durante los disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. A finales de mayo, la situación de inestabilidad política y social hizo que la Copa América de fútbol no pudiera celebrarse en el país. A principios de junio, coincidiendo con la visita al país de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH), el Comité Nacional del Paro suspendió unilateralmente el diálogo por considerar que el Ejecutivo no tenía voluntad política y estaba alargando las negociaciones. A principios de julio **la CIDH presentó un informe en el que criticó de manera contundente la gestión gubernamental de las protestas, denunciando el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, desapariciones o agresiones contra periodistas o servicios de asistencia médica, y también recomendando la separación de la Policía del Ministerio de Defensa** (y su transferencia al Ministerio de Interior). Las recomendaciones de dicho informe fueron secundadas por numerosas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales (que también exigieron la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios), pero el presidente Duque rechazó los contenidos de tal informe e incluso cuestionó el mandato de la Comisión al respecto. A mediados de junio el Comité Nacional del Paro suspendió sus protestas periódicas para centrarse en la construcción de consenso, pero anunció nuevas movilizaciones para finales de julio, que contaron con una afluencia masiva. En la segunda mitad del año se registraron nuevas movilizaciones, pero muy inferiores en afluencia a las del período entre abril y junio. Del mismo modo, tampoco hubo constancia pública de nuevas reuniones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro desde el mes de junio.

Perú	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Gobierno, Recursos Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

#### Síntesis:

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso, posteriormente redominado como Militarizado Partido Comunista del Perú, se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

**Los principales focos de tensión en el país fueron las protestas que se registraron tras la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas y el atentado por parte del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) dos semanas antes de la celebración de la segunda vuelta de dichos comicios, en el que murieron 16 personas**, entre ellas cuatro menores. Respecto de esta última cuestión, varios medios de comunicación señalaron que en el lugar de los hechos –en la localidad de San Miguel del Ene, en la región conocida como Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)– se hallaron octavillas contrarias a la candidata presidencial Keiko Fujimori y también instando a la población a boicotear las elecciones, absteniéndose, votando en blanco o nulo. Tanto Fujimori como el otro candidato, Pedro Castillo, condenaron el atentado, pero ante las insinuaciones sobre los réditos políticos de este episodio bélico que lanzaron ambas candidaturas, el Gobierno llamó a no hacer un uso partidista del atentado del MPCP. No es la primera ocasión en la que las facciones remanentes de Sendero Luminoso llevan a cabo una acción armada pocos días antes de unos comicios. En 2016, por ejemplo, 10 personas murieron en el VRAEM en una acción atribuida al MPCP pocas horas antes de la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Previamente, en 2011,

cinco personas murieron en la región de Cusco en una emboscada del MPCP, el día anterior de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En el año 2020, como mínimo 16 personas (la mitad policías o militares) murieron y otras varias resultaron heridas en varios episodios de violencia en la región del VRAEM, la mayoría emboscadas del MPCP.

Por otra parte, **durante todo el mes de junio se registraron protestas y enfrentamientos entre partidarios de los dos principales candidatos presidenciales –Pedro Castillo y Keiko Fujimori–, después de que se publicaran los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas** que se celebraron en abril (primera vuelta) y junio (segunda vuelta). Aunque los sondeos a pie de urna dieron como vencedora a Fujimori, finalmente las autoridades electorales dieron vencedor a Castillo por un estrecho margen de votos (50,13% para Castillo y 49,87% para Fujimori). En los días siguientes se registraron movilizaciones y protestas por parte de simpatizantes de Fujimori, que denunció irregularidades y fraude, impugnó más de 200.000 votos e incluso pidió la revocación de las elecciones. Tras la desestimación de los recursos de Fujimori y la proclamación definitiva de la victoria de Castillo, cientos de antiguos oficiales militares enviaron una carta a la cúpula de las Fuerzas Armadas en la que pedían que no se reconociera el triunfo de Castillo y que se secundaran las acusaciones de fraude por parte de Fujimori. Finalmente, también cabe destacar que durante varios momentos del año se registraron **expresiones de malestar social por la gestión y el impacto de la pandemia de la COVID-19**. En este sentido, a finales de mayo el Gobierno peruano presentó un informe en el que actualizaba el registro de personas fallecidas por coronavirus (pasando de 69.342 a 180.764), convirtiéndose Perú en el país del mundo con una mayor mortalidad por COVID-19 en relación al tamaño de su población y uno de los países de la región con menores tasas de vacunación.

Venezuela	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↓
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social

#### Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el

---

recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

---

**El Gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones políticas, en esta ocasión en México, y no se registraron movilizaciones masivas ni multitudinarias, pero sí siguieron registrándose altos niveles de polarización política y social y numerosas denuncias sobre la situación de derechos humanos en el país.** Respecto de esta última cuestión, en el mes de noviembre el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, anunció el **inicio de una investigación formal por crímenes contra la humanidad cometidos desde el 2017, incluyendo la represión de las protestas que se produjeron entre abril y julio de 2017, en las que murieron más de 130 personas.** El presidente, Nicolás Maduro, manifestó su oposición a tal decisión, pero a la vez mostró la disposición de su Gobierno a colaborar con la investigación, la primera de este tipo en un país latinoamericano. En la misma línea, en el mes de marzo la Misión Internacional de determinación de los hechos declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en los tres primeros meses de 2021 había reportado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales, comprometiéndose a investigar las circunstancias de los mismos. En otro informe hecho público en el mes de septiembre, la misión denunciaba que el sistema judicial del país no ofrece protección a las víctimas y es un pilar fundamental de la represión contra la oposición por parte del Estado. En la misma línea, a lo largo del año varias ONG e incluso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron el hostigamiento de los poderes públicos del Estado contra determinados sectores de la sociedad civil, las ONG o la prensa. En el mes de junio, **ACNUR declaró que Venezuela es el segundo país del mundo con mayor número de personas desplazadas, con más de cinco millones de personas.** En cuanto a los niveles de violencia, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, **en 2021 se registró una tasa de homicidios de 40,9 casos cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de América Latina y el Caribe** (solamente por detrás de Jamaica, con una tasa de 49,4). Sin embargo, dicha tasa fue más baja que la del año pasado y claramente inferior a la que se alcanzó en 2018 (91 homicidios cada 100.000 habitantes).

Por otra parte, siguió constatándose una importante crisis política, social e institucional en el país. En el mes de enero, tomó posesión del cargo la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, que tuvieron una participación del 30,1% (de un 16%, según la oposición) y cuya legitimidad y validez fue rechazada o cuestionada por la

oposición (que en su mayoría boicoteó los comicios) y por numerosos gobiernos y organizaciones internacionales, como la OEA, la UE o Naciones Unidas. A pesar de ello, una parte significativa de la comunidad internacional dejó de reconocer como poder legislativo legítimo del país a la Asamblea Nacional que estuvo activa entre 2016 y 2021 (controlada mayoritariamente por la oposición) y a Juan Guaidó como presidente del país. A pesar de seguir contando con el apoyo y reconocimiento de EEUU, algunos de los principales partidos de la oposición no secundaron el intento de Guaidó de que la mencionada Asamblea siguiera operando. En varios momentos del año determinados representantes de la oposición denunciaron represión y hostigamiento por parte del Gobierno. En enero, por ejemplo, la nueva Asamblea Nacional pidió a la Fiscalía de Venezuela que impidiera la salida del país de Guaidó y de otros 20 representantes políticos. En el mes de julio, tras una operación de las fuerzas de seguridad contra varias bandas de crimen organizado que controlaban algunos barrios de Caracas (y durante la que 26 personas murieron y una cuarentena resultaron heridas), se emitieron órdenes de arresto contra varios líderes del partido Voluntad Popular (liderado por Guaidó) acusados de estar involucrados con dichas bandas y se arrestó a Freddy Guevara --uno de los principales colaboradores de Guaidó—acusado de terrorismo y traición, mientras que Guaidó denunció un intento de detención en su propia casa. En enero, otra operación de las fuerzas especiales de la policía contra una banda delincuencia en un barrio de Caracas finalizó con la muerte de 23 personas. En septiembre, la Fiscalía declaró que Guaidó tenía 25 causas pendientes con la justicia, a las que añadió delitos de rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir.

**La tensión entre el Gobierno y la oposición volvió a incrementarse nuevamente a raíz de la celebración de las elecciones regionales y locales el 21 de noviembre, que tuvieron una participación del 41,8% y en las que el oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela ganó en 19 de los 23 estados y obtuvo 205 de las 322 alcaldías en liza.** A pesar de que en el mes de mayo se había establecido un Consejo Nacional Electoral más inclusivo y de que buena parte de la oposición decidió participar en dichos comicios (por primera vez desde 2017), ésta denunció irregularidades y abusos. En el estado de Apure el candidato opositor no reconoció los resultados, mientras que en el estado de Barinas la Corte Suprema ordenó la repetición de los comicios en enero de 2022 cuando el candidato opositor encabezaba el escrutinio. El Gobierno de EEUU denunció que no habían sido elecciones libres ni creíbles, denunciando arrestos arbitrarios, acoso a organizaciones de la sociedad civil, criminalización a partidos opositores, vetos a candidaturas y manipulación del registro de votantes. La UE denunció irregularidades, y la secretaría general de Naciones Unidas instó al Gobierno a investigar episodios aislados de violencia durante la jornada electoral, como el incidente en el estado de Zulia en el que una persona falleció y otras dos resultaron heridas.

## 2.3.3. Asia y Pacífico

### Asia Central

Kirguistán	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán

#### Síntesis:

Desde su emergencia como Estado independiente en agosto de 1991, la exrepública soviética de Kirguistán ha atravesado diversos periodos de inestabilidad y conflicto sociopolítico. La etapa presidencial de Askar Akayev (1991-2005), que comenzó con un impulso reformador, derivó progresivamente en autoritarismo y corrupción. En marzo de 2005, una serie de manifestaciones que denunciaban fraude en las elecciones de ese año derivaron en una revuelta social que forzó la caída del régimen. Las promesas de cambio del nuevo presidente, Kurmanbek Bakiyev, fueron rápidamente diluidas, dando paso a un modelo de presidencialismo autoritario, corrupto y nepotista, especialmente a partir de finales de 2007. Todo ello en un contexto de dificultades económicas para la población, tensiones latentes entre el norte y sur del país y exclusión de las minorías étnicas de los ámbitos de decisión política. Cinco años después, en abril de 2010, una nueva revuelta popular desembocó en el derrocamiento del régimen, con enfrentamientos que causaron 85 muertos y cientos de heridos, a la que siguió un junio una ola de violencia con dimensión interétnica, con más de 400 víctimas mortales. El país asistió en 2020 a una nueva crisis política, con protestas postelectorales y una controvertida transferencia de poder. Otros ejes de tensión en Kirguistán están vinculados a la presencia de grupos armados regionales de corte islamista en el Valle de Fergana (área entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán) y a las disputas fronterizas con países vecinos.

Un año después de la crisis postelectoral de 2020, se celebraron nuevas elecciones, así como un referéndum constitucional que aprobó el aumento de poderes presidenciales; mientras, escaló la tensión fronteriza, con los incidentes más mortíferos en años en la zona limítrofe con Tayikistán. Sadyr Japárov ganó las elecciones presidenciales del 10 de enero, con el 79,2% de los votos. Japárov había sido nombrado primer ministro en el contexto de las protestas postelectorales del año anterior, en el marco de las cuales fue liberado de prisión y nombrado primer ministro, así como presidente tras la dimisión de Sooronbay Jeenbekov, cargos que posteriormente dejó para poder concurrir a los nuevos comicios. La participación fue del 39%. La observación electoral realizada por la OSCE consideró que, en general, se habían respetado las libertades fundamentales, pero que no había sido una votación plenamente justa en

*En 2021 se produjeron los incidentes más graves en años en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, con medio centenar de víctimas mortales y varias decenas de miles de civiles evacuados*

un escenario desigual y de uso indebido de recursos administrativos por el candidato Japárov, entre otros elementos. El mismo día, **se aprobó en referéndum el cambio de un sistema parlamentario a presidencialista, en el marco de las reformas promovidas por Japárov en 2020**. Con un 38,4% de participación, se aprobó con el 85,2% de los votos. Asimismo, en febrero se nombró al nuevo Gobierno y se presentó el borrador de reforma constitucional. La nueva Constitución incluía la reducción del Parlamento de 120 a 90 miembros y el paso a dos mandatos presidenciales de cinco años, frente al mandato único anterior de seis años, y poderes presidenciales para designar jueces y jefes de servicios policiales. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH) expresaron preocupación por el nuevo texto, incluyendo por el papel preponderante de la Presidencia y sus competencias; el debilitado papel del Parlamento; los riesgos de injerencias en la independencia judicial; la falta de respeto a los principios de derecho y legalidad en relación al calendario y procedimientos para su adopción; así como la falta de consultas públicas y debate parlamentario inclusivos y sustantivos. La reforma fue finalmente aprobada en referéndum en abril, con el 85,2% de los votos y un 36,6% de participación.

Por otra parte, se produjeron elecciones parlamentarias el 28 de noviembre. Los cuatro partidos con mayor respaldo fueron Ata-Zhurt, con el 17,3% de votos; Ishenim, con 13,6%; Yntymak, con un 12% y Alliance, con 8,3%. Analistas señalaron que los resultados reforzaban a Japárov. Entre los grupos que entraron en el nuevo Parlamento, solo un partido era considerado opositor, Butun Kyrgyzstan. Partidos opositores protestaron contra los comicios y resultados, que consideraron fraudulentos. **Dos días antes de las elecciones, el Comité Estatal de Seguridad Nacional anunció la detención de una quincena de personas, incluyendo parlamentarios y ex altos cargos, que supuestamente planeaban un intento de golpe de Estado mediante la organización de protestas**. Por otra parte, en la primera mitad del año se produjeron diversas protestas ciudadanas, de alcance limitado, en torno a cuestiones como la corrupción (febrero) o la aprobación de una ley de protección del honor que activistas locales y organizaciones internacionales alertaron de que podría ser instrumentalizada para la censura.

Otro eje de tensión durante el año fueron las disputas fronterizas. **A finales abril se produjeron los incidentes más graves en años en la frontera con Tayikistán – más de la mitad de su extensión no está demarcada**. Incidentes intercomunitarios en torno a infraestructuras de aguas en la localidad de Kok-Tash (Kirguistán) evolucionaron a hostilidades entre las fuerzas de seguridad de Kirguistán y Tayikistán. Kirguistán acusó a Tayikistán de

usar disparos de mortero y ametralladoras. La tensión se extendió a más de una quincena de localidades en la región de Batken, fronteriza con Tayikistán. Se informó de la toma de control por Tayikistán de la carretera que conectaba con el enclave tayiko de Vorukh y Kirguistán atribuyó a Tayikistán la destrucción de diversos puestos fronterizos. **En conjunto, medio centenar de personas murieron, incluyendo civiles y fuerzas de seguridad, y en torno a 200 resultaron heridos. En torno a 24.000 de personas fueron evacuadas de la región de Batken, según autoridades kirguisas, y unas 15.000 de la región de Sughd (Tayikistán).** Hubo destrozos y quemas de casas, tiendas, vehículos y un colegio. Se acordó un alto el fuego el 29 de abril. En junio se produjo una nueva escalada de tensión militar en torno a una zona no demarcada de la frontera en el distrito de Chon-Alai (región de Osh). Ambas partes alcanzaron un acuerdo de nueve puntos en que se comprometían a retirar de la zona en disputa puestos fronterizos y a iniciar pasos para delimitar esa zona de la frontera mediante grupos de trabajo. Se produjeron nuevos incidentes de violencia en meses posteriores. En contraste con la tensión en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán dieron pasos de reducción de sus disputas fronterizas. Ambos países acordaron en marzo un protocolo de delimitación y demarcación de la frontera. Tras negociaciones entre las dos delegaciones –encabezadas en el caso de Kirguistán por el jefe del Comité Estatal de Seguridad Nacional, Kamchybek Tashiev, y de Uzbekistán por su primer ministro, Abdulla Aripov– todos los contenciosos fronterizos quedaron resueltos, según Kirguistán. Las negociaciones siguieron a una reunión entre ambos presidentes ese mismo mes en la que también abordaron la cuestión fronteriza, entre otros temas. El acuerdo incluía varios intercambios de territorio, así como permitía a Uzbekistán el uso de reservas de agua a cambio de más territorio para Kirguistán. Asimismo, contenía medidas para simplificar el tránsito entre Uzbekistán y su enclave de Sokh, rodeado de territorio de Kirguistán.

## Asia Meridional

India – China	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↓
<b>Tipología:</b>	Territorio Internacional
<b>Actores:</b>	India, China

### Síntesis:

La frontera compartida por China e India ha sido objeto de disputas desde la década de 1950, tras la partición de India y Pakistán y la fundación de la República Popular China en 1949. Esta frontera nunca ha sido formalmente delimitada mediante un acuerdo entre ambos países y son varias las zonas sobre cuya demarcación existe conflicto. En la zona occidental de la frontera la disputa gira en torno a la zona de Aksai Chin, un área deshabitada cuyo territorio

India reclama y considera que pertenece a la región de Ladakh (parte de Jammu y Cachemira) y que administra China como parte de la región de Xinjiang. El anuncio por parte de China de la construcción de una carretera que unía Xinjiang con Tíbet atravesando la región de Aksai Chin incrementó la tensión con la India, que se vio agravada tras la concesión de asilo al Dalai Lama en India en 1959. En los años siguientes se produjeron movimientos de tropas por partes de ambos países en la zona. En 1962 se inició una guerra que finalizó con la derrota militar de India, pero sin que se resolviera la cuestión de la demarcación, asunto que siguió condicionando las relaciones entre ambos Estados, así como con otros países de la región, especialmente con Pakistán. En 1988 los dos Gobiernos acordaron resolver la disputa por vías pacíficas. No obstante, desde entonces no se han logrado avances en las negociaciones y la tensión militar en las zonas en disputa ha persistido.

Se mantuvo la tensión entre los dos países, con altibajos durante el año y algunos resultados parciales en las negociaciones bilaterales. El año se había iniciado con un nuevo enfrentamiento entre ambos Ejércitos en la zona de Sikkim, que habría dejado 20 soldados chinos y cuatro indios heridos según informaron medios de comunicación indios, pero que fue calificado de “menor”. Además, las fuerzas de seguridad indias entregaron a China a un soldado detenido, que habría cruzado Línea de Control Actual (LCA), como se denomina a la frontera de facto entre ambos países. En febrero se anunció un acuerdo para la retirada militar de la zona del lago Pangong y por primera vez las autoridades chinas admitieron de forma oficial que cuatro de sus soldados habían muerto durante los enfrentamientos que tuvieron lugar durante 2020. A pesar del acuerdo inicial, en los siguientes meses hubo dificultades para concretar el proceso y se repitieron las desavenencias entre ambos países. Además, China continuó proporcionando equipamiento a sus tropas desplegadas en la frontera, incrementando su capacidad militar a lo que India respondió señalando que también mejoraría su situación militar en la frontera. El fortalecimiento militar representó un obstáculo para el acuerdo, que debía encaminarse a la retirada de las tropas y la infraestructura militar fronteriza. Además, se conoció que India había incrementado su despliegue en la frontera con 50.000 soldados adicionales y había inaugurado 12 carreteras en Arunachal Pradesh, Ladakh y Jammu y Kashmir, señalando que esta infraestructura debía servir para mejorar la seguridad fronteriza y facilitar el desplazamiento de las fuerzas de seguridad. No obstante, en agosto China e India acordaron la retirada militar en la zona de Gogra en Ladakh este. El acuerdo conllevaba la retirada de todas las estructuras temporales y de otro tipo y la restauración del relieve a la situación previa al estallido de la crisis. Ambas partes pusieron fin al despliegue de tropas y señalaron que ambos Ejércitos estaban en sus bases permanentes. El acuerdo se produjo después de la 12ª ronda de negociaciones que tuvo lugar el 31 de julio en el lado chino de la LCA. Además, se estableció una zona de separación desmilitarizada en la que no patrullará ninguno de los dos Ejércitos. También se

completaron las retiradas de las zonas del lago Pangong y el valle de Galwan, escenario de la confrontación más grave entre los dos países, que tuvo lugar en 2020. A pesar del acuerdo, India llevó a cabo ejercicios militares posteriormente en zonas cercanas a la frontera y en octubre se produjo una nueva escalada de la tensión cuando las tropas de ambos países se encontraron frente a frente en el sector de Tawang este, en el estado indio de Arunachal Pradesh, en una zona reivindicada por China. A pesar del incidente no se produjeron enfrentamientos. El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, señaló que las relaciones entre India y China se hallaban en un mal momento y acusó a Beijing de haber llevado a cabo acciones que violaban los acuerdos alcanzados.

India – Pakistán	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↓
<b>Tipología:</b>	Identidad, Territorio Internacional
<b>Actores:</b>	India, Pakistán

#### Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera *de facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

Se mantuvo la situación de tensión entre India y Pakistán, a pesar del anuncio de alto el fuego en febrero. **En un comunicado conjunto señalaron que ambos países se comprometían a la estricta observación de los acuerdos y del alto el fuego en la Línea de Control y otros sectores.** En el año 2003 India y Pakistán firmaron un acuerdo de alto el fuego que, a pesar de seguir vigente, había sido constantemente incumplido en los últimos años, con intercambios de fuego por parte de

ambos Ejércitos, lo que había provocado numerosas víctimas mortales en los últimos años, tanto civiles como militares. El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión regional, por la escalada militar entre India y China debido a disputas fronterizas durante 2020, el deterioro de la situación en Afganistán, así como la retirada del estatus de estado para Jammu y Cachemira en 2019 por el Gobierno indio, lo que provocó un deterioro en las relaciones con Pakistán. En abril, el periódico pakistaní Dawn reveló que India habría hecho una oferta a Pakistán en diciembre de 2020 para reducir la tensión entre los dos países e iniciar conversaciones indirectas sobre todas las cuestiones que les enfrentan, incluyendo la disputa por Cachemira, propuesta que habría tenido una respuesta favorable por parte de Pakistán. De hecho, tras el anuncio de compromiso con el acuerdo de alto el fuego de 2003 se redujo la violencia en torno a la Línea de Control, aunque prosiguieron los enfrentamientos armados en Jammu y Cachemira. Según Dawn, los acercamientos los habrían llevado a cabo los jefes de inteligencia de los dos países a propuesta de India, que no quería que las conversaciones tuvieran lugar entre interlocutores políticos. Los encuentros tuvieron lugar en Emiratos Árabes Unidos según confirmó un diplomático de este país, que habría llevado a cabo iniciativas para favorecer el acercamiento, aunque India señaló que ambas partes habrían estado de acuerdo en no incorporar a una tercera parte al diálogo. La prioridad para Pakistán sería el retorno del estatus de estado a Jammu y Cachemira. India, por su parte, habría priorizado el acercamiento a Pakistán en un intento de reducir la tensión para poder dedicar más recursos militares a la tensión con China e incrementar su despliegue militar en la frontera con este país. El diálogo no fructificó y las relaciones entre ambos países se deterioraron nuevamente a partir del mes de abril con acusaciones mutuas, aunque no se constataron violaciones al acuerdo de alto el fuego. En septiembre, las fuerzas de seguridad indias señalaron que no se había producido ningún incidente en la Línea de Control desde febrero, aunque la violencia persistió en Jammu y Cachemira, con infiltraciones de insurgentes desde Pakistán, según señaló el Gobierno indio. Pakistán, por su parte, denunció las detenciones de activistas cachemires por parte de las autoridades indias.

## Asia Oriental

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea <sup>32</sup>	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Gobierno Internacional
<b>Actores:</b>	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

32. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

### Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Aunque en varios momentos del año el nuevo Gobierno de EEUU ofreció a Corea del Norte la reanudación del diálogo y de los cauces diplomáticos para abordar la desnuclearización de la península coreana, persistieron varios ejes de tensión entre ambos países, como la realización de los ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur, el despliegue de más de 28.000 soldados estadounidenses en territorio surcoreano, la aplicación de sanciones económicas a Corea del Norte por parte de Washington, el desarrollo de nuevo armamento, la realización de ensayos balísticos por parte de Corea del Norte o la continuación del programa armamentístico por parte de Pyongyang. Respecto de esta última cuestión, en el mes de marzo **el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) declaró mostrarse extremadamente preocupado por el hecho de que Corea del Norte haya seguido desarrollando su programa nuclear a pesar de las sanciones internacionales y de los compromisos que el propio Gobierno asumió en el marco de las cumbres presidenciales que mantuvieron Kim Jong Un y el expresidente estadounidense Donald Trump en 2018 y 2019.** En 2017 Corea del Norte llevó a cabo su último ensayo nuclear, mientras que en 2018 declaró haber inutilizado los túneles de la principal instalación de ensayos nucleares del país en Punggye-ri. Pocas semanas antes de estas advertencias de la AIEA, el panel de personas expertas de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de sanciones a Corea del Norte emitió un informe confidencial dirigido al Consejo de Seguridad –pero filtrado a algunos medios de comunicación– que durante el año 2020 Corea del Norte había seguido expandiendo su programa nuclear y balístico, principalmente a través de los recursos –unos 316 millones dólares– obtenidos en varios ciberataques en 2019 y 2020. En agosto, tanto la AIEA como el secretario general de la ONU expresaron su preocupación por la reactivación del reactor de Yongbyong –el más grande del país y en el que se habría producido el plutonio necesario para desarrollar el programa nuclear de Corea del Norte–, que se suponía inactivo desde

diciembre de 2018. Naciones Unidas y la AIEA, cuyos observadores fueron expulsados del país en 2009, instaron a Pyongyang a observar tanto las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como el Tratado de No Proliferación e hicieron un llamamiento a la reanudación de los cauces diplomáticos como única opción para lograr la desnuclearización de la península coreana.

Además de los avances del programa atómico de Corea del Norte, **otros dos aspectos que generaron preocupación en EEUU y otros gobiernos fue el alto número de ensayos balísticos por parte de Pyongyang –especialmente en marzo, septiembre y octubre– y el desarrollo de nuevo armamento a lo largo del año.** Cabe destacar los nuevos misiles balísticos lanzados desde un submarino presentado durante uno de los mayores desfiles militares de los últimos años en el mes de enero o un ferrocarril con capacidad para lanzar misiles balísticos; así como parte del armamento sofisticado que Kim Jong Un exhibió en octubre, como un misil hipersónico, misiles crucero de baja altitud de vuelo o uno de los mayores misiles balísticos intercontinentales fabricados hasta el momento.

En el plano más político, Corea del Norte rechazó en varias ocasiones el ofrecimiento de diálogo por parte de Washington, alegando que este trataba de esconder y legitimar sus políticas hostiles hacia el país. Aun si en alguna ocasión Kim Jong Un mostró una cierta disposición a retomar los contactos diplomáticos con la Administración de Joe Biden, Pyongyang declaró que EEUU sigue siendo su principal enemigo y criticó con contundencia los ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur llevados a cabo en marzo y agosto, la presencia permanente y masiva de soldados estadounidenses en Corea del Sur o la imposición de sanciones económicas por parte de Washington. Por su parte, Biden declaró ante el Congreso que el programa nuclear norcoreano sigue siendo una de las principales amenazas para EEUU y llamó a Pyongyang a no caer en provocaciones ni en acciones que violen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. A finales de año, el comandante del contingente militar de EEUU en Corea del Sur advirtió que la declaración del fin de la Guerra de Corea, sugerida en el mes de septiembre por el presidente surcoreano, podría conllevar el fin del rol que han tenido EEUU y Naciones Unidas en la península coreana desde los años cincuenta.

Corea, RPD – Rep. de Corea	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Sistema Internacional
<b>Actores:</b>	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

---

### Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

---

**Durante el año hubo avances importantes en la mejora de las relaciones bilaterales, como la reanudación de las comunicaciones entre ambos países o la disposición mutua a discutir una declaración que ponga fin a la Guerra de Corea (1950-53), pero persistieron acusaciones y amenazas cruzadas y ambos países llevaron a cabo ensayos balísticos** en varios momentos del año. Respecto de esta última cuestión, cabe destacar el acuerdo entre Corea del Sur y EEUU para poner fin a las limitaciones que ambos países acordaron en 1979 sobre el alcance (180 kilómetros) y la carga (500 kilos) de los misiles de Corea del Norte. Aun si dichas restricciones habían sido modificadas y ampliadas en cuatro ocasiones (1997, 2012, 2017 y 2020), el nuevo acuerdo alcanzado por Seúl y Washington podría dar inicio, como reconoció el propio presidente surcoreano, a una nueva etapa de desarrollo de capacidades espaciales y balísticas. En este sentido, a mediados de septiembre, tras ensayar Corea del Sur el lanzamiento de misiles balísticos desde un submarino, el primer país no nuclear en hacerlo, el presidente Moon Jae In declaró que este tipo de ensayos incrementa la capacidad de disuasión de Corea del Sur. Por su parte, Corea del Norte declaró que este tipo de acciones podrían desestabilizar la península y llevar a la completa destrucción de las relaciones bilaterales. En la misma línea, en el mes de octubre Corea del Sur lanzó su primer cohete de fabricación propia al espacio, aunque finalmente no consiguió poner la carga del mismo en órbita. Según algunos analistas, Corea del Sur ya ha desarrollado y testeado misiles de crucero y balísticos de alcance intermedio con cargas de hasta 2.000 kilos, pero en el futuro podría desarrollar misiles balísticos de mayor alcance (capaces de impactar objetivos más allá de la península coreana), misiles balísticos de largo alcance lanzados desde submarinos o armas hipersónicas. Estos mismos análisis también sugieren que la disposición del Gobierno de EEUU a poner fin a las mencionadas restricciones a Corea del Sur

no solamente responde a la necesidad de contrarrestar el desarrollo de programa armamentístico de Corea del Norte en los últimos años, sino que podría estar vinculada a su estrategia de contención y disuasión de China en la región. Por su parte, **Corea del Norte llevó a cabo más de una decena de ensayos balísticos durante el año** que fueron criticados por varios países por violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe destacar especialmente el lanzamiento a mediados de septiembre de misiles balísticos desde un tren, que penetraron en la Zona Económica Exclusiva de Japón y que fueron considerados una amenaza importante por parte de varios países por cuanto denotarían la voluntad de Pyongyang de diversificar sus opciones de lanzamiento de misiles y harían más difícil la identificación y rastreo de su arsenal.

El otro aspecto que generó mayor tensión entre ambos países fueron los ejercicios militares conjuntos que cada año llevan a cabo Corea del Sur y EEUU, y que en 2021 se realizaron entre el 8 y 16 de marzo y el 16 y 23 de agosto. Aunque estos ejercicios fueron de menor envergadura que los de años precedentes (y en los de agosto no participaron en ellos tropas terrestres), Corea del Norte los criticó de manera contundente e incluso cortó las comunicaciones con Corea del Sur en el mes de agosto, pocas semanas después de haberlas reanudado. Finalmente, cabe destacar que durante el año siguieron produciéndose numerosas y graves denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. En febrero, un informe de Naciones Unidas denunciaba la posible comisión de crímenes contra la humanidad en el sistema penal norcoreano, señalando que los prisioneros políticos son sujetos a formas extremas de crueldad, detallando casos de violencia sexual, tortura, trabajo forzado, inanición forzada o denegación de la atención médica e instando al Consejo de Seguridad a elevar el caso al Tribunal Penal Internacional. En julio se publicó otro informe del All-Party Parliamentary Group de Reino Unido (APPG), en el que también se relata la comisión de crímenes contra la humanidad y se denuncia que la situación de derechos humanos en el país no ha mejorado desde que en el año 2014 la Comisión de Investigación de la ONU publicara un informe señalando que la naturaleza, gravedad y escala de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado norcoreano no tenían comparación alguna con ningún otro caso en el mundo contemporáneo. En cuanto a la situación humanitaria, varios informes detallaron varios casos de muerte por inanición y advirtieron sobre una grave escasez de alimentos en el país. En este sentido, el relator de derechos humanos de Naciones Unidas en el país advirtió sobre el impacto que las sanciones internacionales están teniendo sobre la población civil, mientras que **la FAO señaló que en 2021 Corea del Norte necesitaba urgentemente 860.000 toneladas de comida**. Además del impacto de la COVID-19, que comportó el cierre de fronteras en un país que es altamente dependiente de China en varios productos de primera necesidad, el director general de la FAO también advirtió que el clima extremo

vinculado al cambio climático, que recientemente se ha expresado en episodios de sequías e inundaciones en el país, también estaba impactando gravemente en la seguridad alimentaria del país, por lo que llamó a la cooperación internacional para paliar sus efectos en la población norcoreana.

## Sudeste Asiático y Oceanía

Indonesia (Papúa Occidental)	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

### Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

Se registraron enfrentamientos muy frecuentes entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado OPM y varias voces advirtieron que la ofensiva militar del Ejército, considerada una de las mayores de las últimas décadas, habría provocado el desplazamiento forzado de miles de personas. Según cómputos realizados a partir de noticias de medios de comunicación, unas treinta personas murieron a lo largo del año, aunque algunas voces señalan que pueden llegar a ser muchas más. **A finales de año, el Consejo de Iglesias de Papúa Occidental señaló que, según sus propias investigaciones, desde diciembre de 2018 más de 400 personas habían muerto en las provincias de Papúa y Papúa Occidental como consecuencia del conflicto que atraviesa la región.** Según la Asociación de las Iglesias Bautistas de Papúa Occidental, como mínimo 60.000 personas habrían abandonado sus hogares, la mayoría asentándose en regiones aledañas y muchas otras cruzando la frontera con Papúa Nueva Guinea. Además

***A finales de año, el Consejo de Iglesias de Papúa Occidental señaló que desde diciembre de 2018 más de 400 personas habían muerto en las provincias de Papúa y Papúa Occidental como consecuencia del conflicto que atraviesa la región***

del distrito de Puncak, el epicentro de las hostilidades bélicas en los últimos años, otros distritos en los que se han producido episodios de violencia incluyen Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Maybrat o Pegunungan Bintang. El líder del Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental (MULPO) y presidente del gobierno en el exilio establecido en el exilio en diciembre de 2020, Benni Wanda, denunció que la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas en la región es la de mayor envergadura desde los años setenta, e incluiría el despliegue adicional de numerosos efectivos militares, el uso habitual de apoyo aéreo, el corte de internet en determinadas regiones o el desplazamiento masivo de población local. Algunos de los episodios de violencia más significativos del año fueron el ataque del OPM a un puesto militar en el distrito de Maybrat, en el que cuatro militares murieron y otros dos resultaron heridos; los ataques contra trabajadores de la construcción en junio en Puncak, en los que varias personas murieron (en diciembre de 2019, 19 trabajadores de la construcción murieron en un ataque del OPM); o el asesinato de un general y máximo responsable de la inteligencia militar en la región en el mes de abril en Puncak. Tras este último episodio, el Gobierno declaró como terroristas al OPM y al resto de grupos armados que operan en la región, decisión que fue criticada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y que según algunos analistas podría anticipar una escalada de la violencia en la región y denotar la intención del Gobierno de tratar de gestionar el conflicto desde una lógica básicamente militar.

En el plano político, **el Parlamento aprobó en julio la prolongación durante otros 20 años de la Ley de Autonomía Especial del año 2001, provocando numerosas críticas y protestas.** Según algunas voces, la reforma de la ley (que incluye la enmienda de 18 artículos y la inclusión de otros dos) se ha hecho sin ningún tipo de consultas ni participación a escala local, incrementa el control del Gobierno central sobre la región y no prevé la formación de partidos políticos regionales. Por su parte, el Gobierno declaró que la reforma de la ley propiciará la aceleración del desarrollo de la región. Sin embargo, según Benni Wanda, la resolución del conflicto pasa por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo papú y por la repetición del referéndum de 1969, que el nacionalismo papú y parte de la comunidad internacional no reconoce como legítimo. De hecho, Wanda criticó que las actividades de multinacionales extractivas (como Rio Tinto, Freeport-McRoran o BP) han agudizado el conflicto en la región desde los años sesenta. En esta línea, en abril Greenpeace publicó un informe en que denunciaba la connivencia entre algunas multinacionales y determinados sectores del Gobierno y en el que detallaba numerosas irregularidades en el proceso de adjudicación de concesiones de explotación de recursos naturales en Papúa Occidental. En el mes

de julio más de 120 personas fueron detenidas en las manifestaciones en contra de la prolongación de la Ley de Autonomía Especial que se produjeron en Yakarta, Jayapura, Sorong y otras ciudades de la región. Finalmente, cabe destacar que el representante de MULPO en Vanuatu pidió la admisión del MULPO como miembro de pleno derecho en el Melanesian Spearhead Group –grupo regional conformado por Papúa Nueva Guinea, Fiji, Islas Salomón, Vanuatu y el Frente Canac y Socialista de Liberación Nacional en representación del pueblo canac de Nueva Caledonia–, del que actualmente es observador.

Tailandia	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

#### Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

**Durante el año se registraron protestas de una magnitud considerable para exigir la renuncia del primer ministro Prayuth Chan-o-cha, la reforma de la Constitución para hacerla más democrática y la reforma de la Monarquía para hacerla más transparente.** Aunque no trascendieron datos oficiales sobre el impacto de tales movilizaciones, se estima que cientos de personas resultaron heridas y que muchas más fueron detenidas en el marco de las protestas, durante las que se produjeron numerosos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A modo de ejemplo, solamente entre julio y septiembre más de 600 personas fueron arrestadas. **Las protestas, especialmente multitudinarias en los meses de febrero, marzo, julio y agosto, también estuvieron motivadas por la oposición a la legislación que regula los delitos de lesa majestad.** En este sentido, el mes de agosto trascendió que más de 150 personas habían sido detenidas desde noviembre de 2020

por tales cargos. En febrero, Naciones Unidas había expresado su preocupación por la creciente utilización del artículo 112 del Código Penal (que prohíbe la difamación contra la Monarquía y está penado con entre 3 y 15 años de prisión), y ya previamente en noviembre de 2020 había exigido su enmienda por considerar que no era compatible con el derecho internacional. En octubre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Thai Lawyers for Human Rights y el Internet Law Reform Dialogue habían publicado un informe sobre cómo el Gobierno había utilizado tal legislación para coartar tanto la participación en manifestaciones en favor de la democracia como la expresión de ideas políticas en internet. Poco después, en noviembre, durante la celebración del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 12 países pidieron la reforma del mencionado artículo 112. Sin embargo, también en el mes de noviembre, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia señalando que las protestas para reformar la Monarquía suponían un intento sedicioso de subvertir el sistema de gobierno en Tailandia, cuyo jefe de Estado es el rey. Esta sentencia tenía un carácter general y no solamente aplicaba a tres líderes sociales que habían sido detenidos en febrero, por lo que algunos analistas consideraron que abría la puerta a que manifestantes prodemocracia fueran juzgados por revuelta o rebelión, delitos que pueden comportar cadena perpetua. En el plano político, cabe destacar la moción de censura que se presentó en septiembre contra el Prayuth Chan-o-cha y cinco de sus ministros por corrupción y mala gestión de la pandemia, y que finalmente no prosperó.

## 2.3.4. Europa

### Europa oriental

Belarús	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna internacionalizada
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social, UE, Polonia, EEUU, Rusia

#### Síntesis:

La exrepública soviética de Belarús alcanzó su independencia en 1991, convirtiéndose en una república presidencialista. Desde 1994 ha estado gobernada por Alexander Lukashenko, cuyos poderes presidenciales y límite de mandatos se ampliaron en referéndum en 1996 y 2004. Con una economía centralizada, heredera de la etapa soviética, y dependiente energéticamente de Rusia, Belarús ha oscilado entre relaciones de alianza estratégica con Rusia y una política de afirmación de la soberanía nacional que le ha reportado etapas de crisis con su país vecino. El régimen de autoritarismo político y de vulneración de derechos humanos ha dejado escaso margen para la oposición política y social al tiempo que ha sido motor de tensión de baja intensidad. En 2020 la reelección de Lukashenko generó

---

movilizaciones antigubernamentales masivas. La represión masiva del régimen a las movilizaciones desencadenó una grave crisis política y social.

---

**Continuó la tensión sociopolítica en Belarús, con prácticas sistemáticas de represión del régimen contra la oposición política, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, entre otros sectores.**

La crisis –iniciada en 2020 en torno a las elecciones presidenciales, con las restricciones del régimen a candidaturas opositoras, la reelección de Lukashenko y la movilización masiva de la oposición contra unos resultados considerados fraudulentos, respondida con represión– se manifestó en 2021 en forma de grave persecución en todos los ámbitos y niveles. Se produjeron detenciones masivas, cierres de organizaciones de la sociedad civil (incluyendo entidades de larga trayectoria, como el centro de derechos humanos Vyasna y el Comité Helsinki Bielorruso), redadas constantes contra oficinas y domicilios, cierres de canales informativos (medios tradicionales, páginas de internet y redes sociales) y persecución de sus suscriptores, sentencias de prisión (considerados casos fabricados por organizaciones como Amnistía Internacional) y obstaculización del trabajo de defensa legal, entre otras. Sectores de población como estudiantes, personal sanitario y deportistas se vieron afectados también por intimidaciones y represión. Se aprobaron enmiendas legislativas en diversas leyes y en el Código Penal que ampararon la práctica represiva y violaciones de derechos humanos e incrementaron las penas. Se desplegaron tropas y vehículos militares junto a Policía en respuesta a protestas. **La Alta Comisionada de derechos humanos alertó en julio de violaciones masivas de derechos humanos sin precedentes en alcance y gravedad y cifró en 35.000 las personas detenidas desde el inicio de la crisis en 2020.**<sup>33</sup> A mediados de 2021 más de 200 organizaciones de la sociedad civil habían sido cerradas o afrontaban proceso de cierre, según Amnistía Internacional.<sup>34</sup> Entidades especializadas en investigación sobre tortura y atención a víctimas apuntaron a una “política coordinada de tortura sistemática”.<sup>35</sup> Se produjeron protestas durante el año, y pese al intento en marzo de reimpulsar movilizaciones de mayor escala, fueron de tamaño y duración limitadas (incluyendo *flashmobs*), ante el grado de represión y como estrategia para prevenir detenciones. Se mantuvo el carácter pacífico de las protestas, con movilizaciones en la capital, Minsk, y en decenas de localidades.

La líder opositora Svetlana Tijanóvskaia, exiliada en Lituania, así como otros sectores de la oposición reclamaron un diálogo nacional inclusivo como vía de solución e instaron a actores como la OSCE a promoverlo. El Gobierno, que enfocó la crisis como un problema de “extremismo” y “terrorismo” y de intento de desestabilización con apoyo extranjero,

descartó el diálogo. En su lugar, impulsó una reforma constitucional sin participación ciudadana encaminada a fortalecer la continuidad del régimen. El borrador de cambios, anunciado en diciembre, incluía inmunidad vitalicia para Lukashenko; institucionalizada un órgano paralelo al Parlamento, la Asamblea Popular –puesta en marcha ya en febrero como espacio de figuras leales al presidente–, con participación del presidente y expresidentes y competencias en política exterior y de seguridad, entre otros; y límite a dos mandatos la presidencia, sin carácter retroactivo. Estaba previsto un referéndum en febrero de 2022 para su aprobación.

La grave crisis interna tuvo dimensión internacional. Por una parte, generó respuesta internacional en forma de llamadas de alerta y sanciones. 35 miembros de la OSCE activaron el llamado Mecanismo de Viena para solicitar explicaciones sobre las violaciones de derechos humanos. Actores internacionales como la UE, EEUU, Canadá, entre otros, prolongaron y ampliaron sanciones en diversos momentos del año. Entre ellos, la intercepción en mayo por un jet de combate bielorruso de un avión comercial en ruta de Grecia a Lituania a su paso por el espacio aéreo de Belarús, su aterrizaje forzoso y detención de un periodista bielorruso y su pareja propició sanciones comerciales en el ámbito aéreo. En meses sucesivos se ampliaron restricciones relativas a sectores como la potasa –exportación clave para Belarús–, tabaco, petróleo, productos petroquímicos, entre otros. En paralelo, se agravaron las relaciones entre Occidente y Belarús, con expulsión de diversos diplomáticos (Francia, Lituania, Letonia, Polonia). Por otra parte, Belarús y Rusia firmaron en noviembre diversos acuerdos de integración, en el marco de su proceso de negociación de décadas. A su vez, el deterioro de la situación en torno al conflicto de Ucrania –con el despliegue masivo de tropas de Rusia cerca de la frontera con Ucrania y alertas de inteligencia estadounidense y ucraniana a partir de noviembre sobre una posible invasión– añadió incertidumbre a las tensiones en el Este de Europa.

Belarús, por su parte, en lo que fue considerado como una respuesta a las sanciones, puso en marcha una política de presión contra países vecinos de la UE, facilitando el tránsito de personas migrantes desde su territorio a Lituania, Letonia y Polonia. Los gobiernos vecinos declararon estados de emergencia, desplegaron fuerzas armadas a la frontera y aprobaron la construcción de vallas con alambradas. Varios miles de personas quedaron en el limbo, entre la frontera entre Polonia y Belarús, en grave situación de emergencia humanitaria. Del lado polaco, se impuso una zona de restricción de acceso. ACNUDH denunció, en base a entrevistas realizadas, la falta o limitaciones de acceso a alimento, agua potable y refugio a que hacía frente

---

33. ACNUDH, “Belarus: Massive human rights violations unprecedented in scope and gravity, says UN expert”, *ACNUDH*, 5 de julio de 2021.

34. Amnistía Internacional, “Belarus: International human rights groups demand release of Viasna members on first anniversary of crackdown”, *AI*, 17 de septiembre de 2021.

35. IRCT, “Belarus: Support to Torture Survivors Imperative in Absence of Accountability”, IRCT, 17 de septiembre de 2021.

la población migrante, así como el uso de la fuerza y amenazas por las fuerzas de seguridad de Belarús y las expulsiones y detenciones por parte de Polonia.<sup>36</sup> La UE acusó a Belarús de convertir a las personas migrantes en un arma de presión, al tiempo que mantuvo su política migratoria de priorización de deportaciones y de promover acuerdos con países de origen para facilitar la expulsión, como fue el caso con Iraq. A mediados de noviembre, Minsk comenzó a transferir a personas migrantes a vuelos de deportación.

## Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	↓
<b>Tipología:</b>	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
<b>Actores:</b>	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía

### Síntesis:

El conflicto entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj —enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto— está asociado a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Este comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre esta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego. Desde el alto el fuego de 1994 ha habido diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. La guerra se reabrió en septiembre de 2020. En torno a 6.800 militares de ambos países murieron o desaparecieron, varios cientos de civiles murieron y unos 91.000 armenios y 84.000 azerbaiyanos se desplazaron. En noviembre de ese año las partes alcanzaron un acuerdo que puso fin a la guerra y que supuso un cambio total del statu quo (control por Azerbaiyán de los distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj, así como de una parte de Nagorno-Karabaj y despliegue de fuerzas rusas de mantenimiento de la paz), pero que dejaba irresuelto el estatus político de Nagorno-Karabaj.

### Tras la guerra de seis semanas en 2020 entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj y sus distritos adyacentes, la situación en 2021 pasó a ser de tensión

**militarizada, con un régimen de alto el fuego frágil y numerosos retos humanitarios.** Se produjeron frecuentes violaciones del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2020. La base de datos de ACLED contabilizó 57 víctimas mortales durante 2021 en algo más de 300 incidentes de violencia. La guerra de 2020 había resultado en la toma militar por Azerbaiyán de una parte de Nagorno-Karabaj, así como de los distritos alrededor del enclave desplazándose las líneas del frente. En ese nuevo escenario en 2021, las fuerzas militares armenias y azerbaiyanas se mantenían a escasa distancia entre ellas y más cerca de núcleos civiles. Como señaló el centro de investigación International Crisis Group, Azerbaiyán estableció nuevos puestos militares y las fuerzas armenias de Nagorno-Karabaj posiciones defensivas en la nueva línea de separación.<sup>37</sup> Las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas desplegadas en 2020 como parte del acuerdo patrullaban dentro de Nagorno-Karabaj y en el corredor de Lachin, pero no en las líneas de frente.<sup>38</sup> En este contexto de militarización y frágiles mecanismos de implementación y supervisión del alto el fuego, **durante el año se produjeron incidentes tanto en torno a la frontera estatal entre Armenia y Azerbaiyán como en la línea de separación de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán.** Se produjeron tiroteos, denuncias de incursiones, explosiones de minas, detenciones, entre otros incidentes, en que las partes se acusaron mutuamente. Hostilidades en noviembre, con seis víctimas mortales de Armenia y siete de Azerbaiyán, así como diversos heridos, incrementaron las alertas y llevaron a una nueva tregua, con mediación de Rusia. A su vez, durante el año se produjeron diversas víctimas mortales y heridos a causa de explosiones de minas, en un contexto en que la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj continuó siendo de las regiones del mundo con mayor presencia de minas y artefactos explosivos. Durante el año, cuestiones como la ubicación de minas, la liberación de prisioneros, la delimitación y demarcación de la frontera y el establecimiento de vínculos de transporte y económicos estuvieron en la agenda del diálogo entre Armenia y Azerbaiyán, marcado por el antagonismo y las divergencias.<sup>39</sup> En septiembre ambos países presentaron denuncias cruzadas ante la Corte Penal Internacional por las actuaciones de cada parte en la guerra de 2020. Entre los avances limitados, las partes acordaron el establecimiento de un canal de comunicación directa entre los ministros de Defensa como mecanismo de prevención de incidentes.

En el plano humanitario, de las decenas de miles de personas armenias que se desplazaron por la guerra de 2020 de Nagorno-Karabaj (en torno a 91.000 armenios y 84.000 azerbaiyanos, según un informe del Consejo de Europa),<sup>40</sup> una gran parte retornó en los meses

36. ACNUDH, *Press briefing notes on Poland/Belarus border*, ACNUDH, 21 de diciembre de 2021.

37. International Crisis Group, *Post-war prospects for Nagorno-Karabakh*, Europe Report núm. 264, 9 de junio 2021.

38. *Ibid.*

39. Para más información sobre el proceso negociador, véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Icaria: Barcelona, 2022.

40. Gavan Paul, *Humanitarian consequences of the conflict between Armenia and Azerbaijan*, Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, Asamblea Parlamentaria, Consejo de Europa, Doc. 15363, 13 de septiembre de 2021.

posteriores al acuerdo de noviembre de 2020. Según informó ACNUR en noviembre de 2021, continuaban en Armenia en torno a 37.000 personas de Nagorno-Karabaj, en su mayoría mujeres y menores, con cifras actualizadas de julio. Tanto la población desplazada a Armenia como la retornada a Nagorno-Karabaj afrontaban necesidades de alojamiento en condiciones dignas y de acceso a medios de vida, entre otras. Por otra parte, el Gobierno de Azerbaiyán afirmó que el 70% del en torno a medio millón de población azerbaiyana desplazada en la guerra de los años noventa quería volver a las áreas alrededor de Nagorno-Karabaj de las que huyeron y que pasaron de nuevo a control de Bakú en la guerra de 2020, si bien Bakú cifró en una década el tiempo que podría suponer el desminado de la zona. Divergencias entre Armenia y Azerbaiyán bloquearon el acceso de ACNUR a Nagorno-Karabaj –contemplado en el acuerdo de alto el fuego de 2020–, con cada parte exigiendo que el acceso a la región en disputa se produjese exclusivamente desde su territorio, para no poner en cuestión el estatus que cada parte defiende –pertenencia de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, en el caso de Bakú; y defensa de autodeterminación de la región, por parte de Ereván.

Por otra parte, la situación de conflicto se vio afectada por la tensión interna en Armenia, de la mano del descontento político y social por la derrota militar en 2020. La oposición política llevó a cabo manifestaciones antigubernamentales en los primeros meses del año, exigiendo la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinian. Entre las acciones de protesta, se bloqueó el Parlamento en marzo. Gobierno y oposición alcanzaron ese mes un acuerdo para celebrar elecciones anticipadas en junio y levantar la ley marcial impuesta en el estallido de la guerra de 2020, como medidas para desescalar la crisis. Pashinian dimitió del cargo en abril y se mantuvo como primer ministro en funciones. En contraste con las protestas y los sondeos, el partido del primer ministro Nikol Pashinian, Contrato Civil, ganó las elecciones anticipadas de junio con un 53,9% de los votos y 71 escaños.

## Sudeste de Europa

Bosnia y Herzegovina	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Autogobierno, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
<b>Actores:</b>	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional

### Síntesis:

En el marco del proceso de descomposición de la Federación de Yugoslavia, la ex república yugoslava de Bosnia y Herzegovina, habitada por bosniacos, serbios y croatas, se vio afectada entre 1992 y 1995 por una guerra en la que la élite política serbia del país, con apoyo de Serbia, así como las élites bosnias y croatas, movilizaron a sus respectivas poblaciones y fuerzas en torno a la cuestión étnica a partir de proyectos políticos de autodeterminación de difícil equilibrio entre ellos. Los acuerdos de paz de Dayton dieron paso a un Estado frágil, dividido en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina (con población bosniaca y croata y el 51% del territorio) y la república Srpska (de mayoría serbia y con el 49% del territorio), ambas con amplios poderes. Las tensiones políticas entre las élites de las tres comunidades y entre éstas y la presencia internacional que supervisa la implementación de los acuerdos, así como el legado del impacto del conflicto en la población y el país, son ejes de conflicto aún activos. Se suman otros como la corrupción y la desigualdad. En 2014 más de una treintena de localidades de la federación bosniocroata fueron escenario de movilizaciones en protesta por la gestión política y la situación socioeconómica.

### Se incrementó la tensión en el país, con las advertencias y pasos dados por las autoridades de la República Srpska para retirarse de instituciones

**y órganos estatales como el Ejército, el sistema fiscal y judicial y crear sus propias instituciones.** La crisis generada en 2021 fue calificada por el alto representante para la implementación del acuerdo de paz de Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, como el mayor riesgo existencial que afrontaba el país desde el periodo de posguerra. Las tensiones políticas en el país se agudizaron en la segunda mitad del año. En julio, los representantes serbobosnios en las instituciones del Estado iniciaron un boicot contra éstas (presidencia tripartita, asamblea parlamentaria y consejo de ministros) en respuesta a la introducción por el anterior Alto Representante, Valentin Inzko –quien dejó el cargo en julio–, de enmiendas en el código penal que criminalizaban la negación del genocidio y crímenes de guerra perpetrados en la guerra de los años noventa y el enaltecimiento de criminales de guerra condenados. La decisión de Inzko se enmarcaba, según explicó Schmidt en su informe de noviembre, en un contexto de aumento de posiciones negacionistas por las autoridades serbobosnias. Continuaba también el rechazo de largo recorrido del régimen serbobosnio a la figura del Alto Representante y sus amplias competencias ejecutivas, considerado una injerencia. El boicot incluyó tanto la no participación en diversas votaciones como su obstaculización. En octubre el miembro serbobosnio de la presidencia compartida del país y líder del partido Unión de los Socialdemócratas Independientes (SNSD), Milorad Dodik, anunció que la República Srpska se retiraría de las Fuerzas Armadas, de la Agencia de tributación indirecta y del Consejo Superior del Poder Judicial y Fiscal, que crearía sus propias instituciones en estos

ámbitos y que rechazaría todas las decisiones del Alto Representante. Anunció también que grupos de expertos elaborarían una nueva Constitución, en la que quedarían recogidas las nuevas instituciones de defensa, tributos y sistema judicial.

La posición de Dodik generó reacciones internacionales de alerta. **El propio Alto Representante alertó en su informe de noviembre al secretario general de la ONU que si las autoridades serbobosnias llevaban adelante el anuncio supondría una salida del orden constitucional actual del país y del marco establecido por los acuerdos de paz de Dayton y, en práctica, la secesión del territorio aun si no se declaraba formalmente la independencia.**

El vicesecretario de Estado de EEUU, Gabriel Escobar, mantuvo reuniones con la presidencia tripartita de Bosnia, incluyendo Dodik, para abordar la crisis. Escobar destacó que el principal mensaje era el acuerdo de todos los interlocutores de que no habría conflicto armado y, añadió, Dodik podría paralizar los planes de retirada de las instituciones estatales. EEUU y Alemania también advirtieron con posibles sanciones si se producían retiradas unilaterales. Turquía, por su parte, se ofreció a mediar en la crisis. Frente al apoyo al boicot institucional de julio por parte de todos los partidos serbobosnios, formaciones serbobosnias cuestionaron los anuncios de Dodik para la creación de instituciones propias. El presidente del opositor serbobosnio Partido Democrático Serbio (SDS) Mirko Sarovic expresó preocupación ante los planes de Dodik, del SNSD y los partidos en coalición con éste y alertó sobre el riesgo de colapso económico. **El 10 de diciembre el Parlamento de la República Srpska aprobó con 48 votos (del total de 83 de la cámara) un acuerdo no vinculante para iniciar la retirada de la entidad serbobosnia del Ejército y sistemas tributario y judicial y la elaboración de la legislación de instituciones paralelas.** La oposición abandonó la votación y sectores opositores serbobosnios calificaron los pasos de campaña electoral –ante los comicios previstos para 2022– y advirtieron de los riesgos de que la retirada derive en un conflicto armado. La votación desencadenó reacciones de la OSCE, la UE y del G7, entre otros. Hungría advirtió que vetaría cualquier intento de la UE de sanciones contra Dodik. Rusia, por su parte, restó importancia a los pasos dados por la República Srpska y reiteró su posición favorable a la abolición de la figura del Alto Representante –manifestada durante el año con un intento fallido de resolución de Rusia y China para su eliminación, así como con la amenaza de veto a la renovación de la fuerza militar de la UE en Bosnia, EUFOR, si incluía referencias al Alto Representante. EUFOR fue renovada en noviembre, sin mención a la Oficina del Alto Representante. Por otra parte, a lo largo del año continuó la tensión asociada a

***Se incrementó la tensión en Bosnia y Herzegovina, con la aprobación por el Parlamento serbobosnio de un acuerdo para la retirada de la República Srpska del Ejército y sistemas tributario y judicial estatal***

otro eje de disputa, el de la reforma electoral pendiente. Ante las elecciones previstas para 2022, el retraso en un acuerdo sobre la nueva reforma incrementaba los riesgos de disputas, incluyendo por la posibilidad de boicot electoral de partidos croatas, de la mano de su demanda de un distrito electoral propio.

## 2.3.5. Oriente Medio

### Golfo

Irán	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social

#### Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persisten.

Durante 2021 Irán continuó registrando diversas dinámicas de tensión interna que se sumaron a la tensión internacional relacionada con su programa nuclear.<sup>41</sup> **Las autoridades continuaron con sus políticas de represión y persecución a las voces disidentes, aunque los niveles de contestación y movilizaciones fueron significativamente inferiores a los de 2019**, año de masivas protestas contra el régimen. Organizaciones internacionales de derechos humanos siguieron denunciando el hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos, la persistente impunidad respecto a vulneraciones previas, la restricción de libertades y derechos como el de expresión y asamblea, el encarcelamiento y condena de activistas por actividades pacíficas, el uso de confesiones forzadas obtenidas bajo tortura como evidencias en procesos judiciales y la detención de personas con doble nacional bajo cargos imprecisos de cooperación con Estados hostiles a la república

41. Véase el resumen sobre Irán-EEUU, Israel en este capítulo.

islámica. Irán también continuó siendo uno de los países con mayor aplicación de la pena de muerte. Se estima que entre enero y noviembre de 2021 el régimen había ejecutado a al menos 254 personas.<sup>41</sup> Cabe destacar también que durante 2021 se celebraron elecciones presidenciales en Irán en las que resultó electo Ebrahim Raisi, figura ultraconservadora, con trayectoria en la judicatura y acusado de formar parte de un comité responsable de masivas ejecuciones de personas prisioneras por motivos políticos en 1988. Los comicios también fueron cuestionados por voces críticas por excluir a mujeres, minorías y voces disidentes y por desarrollarse en un contexto altamente represivo. Adicionalmente, se informó de la discriminación a minorías y sobre incidentes de seguridad en algunas regiones que concentran a estas poblaciones. Durante el año trascendieron incidentes en la provincia de Sistán Baluchistán (este) entre las fuerzas de seguridad y personas que intentaban reabrir una ruta de conexión con Pakistán que resultaron en la muerte de al menos 10 personas; protestas por la falta de acceso a agua potable en varias localidades de las provincias de Khuzestan y Lorestan –con un importante porcentaje de población de la minoría árabe– que fueron reprimidas y derivaron en la muerte de al menos nueve personas; y represión a activistas y políticos kurdos, además de algunos ataques contra bases de grupos opositores kurdos en la región autónoma kurda en el norte de Iraq, sin que trascendieran informaciones sobre posibles bajas.

Irán – EEUU, Israel <sup>43</sup>	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Sistema, Gobierno Internacional
<b>Actores:</b>	Irán, EEUU, Israel

#### Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Jomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó

expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.

Durante el año persistió la disputa en torno al programa nuclear iraní. **Pese a la reanudación del proceso diplomático en 2021, esta tensión estuvo condicionada por los obstáculos y el bloqueo de las negociaciones,<sup>44</sup> numerosos incidentes de seguridad con potencial de escalada de violencia y los crecientes incumplimientos de Irán de los términos acordados en el pacto de 2015.** A comienzos de año se generaron ciertas expectativas sobre el posible impacto del cambio de gobierno en EEUU en las dinámicas del conflicto, sobre todo por la voluntad expresada por la administración de Joe Biden de retornar al acuerdo nuclear del que Donald Trump se desvinculó en 2018. No obstante, tanto Washington como Teherán se exigieron mutuamente medidas para reestablecer las negociaciones. Los contactos diplomáticos se reanudaron formal y presencialmente en mayo, en Viena, entre Irán y los países del conocido como P4+1 (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Alemania), con participación indirecta de EEUU –en la sexta ronda del proceso negociador. No obstante, el diálogo quedó suspendido hasta la celebración de elecciones presidenciales en Irán, que en junio dieron la victoria al ultraconservador Ebrahim Raisi. Las negociaciones en torno al programa nuclear iraní no se reanudaron hasta finales de año.

Mientras tanto, **durante todo el año se produjeron una serie de incidentes de seguridad que contribuyeron a tensionar el ambiente entre los actores involucrados en esta disputa.** Algunos de estos episodios no tuvieron una autoría clara. Entre los incidentes, cabe destacar los que ocurrieron en el ámbito marítimo: la explosión que dañó a un barco israelí en el Golfo de Omán en febrero, hecho del que se acusó a Irán; la deflagración que afectó a un barco iraní en el Mediterráneo en marzo; otro ataque explosivo contra una embarcación iraní atribuido a Israel en abril; varios altercados entre naves estadounidenses e iraníes en el Estrecho de Ormuz entre abril, mayo y noviembre; o el ataque a un carguero en la costa omaní del que también se responsabilizó a Teherán. Paralelamente, continuaron registrándose hechos de violencia en terceros países en el marco de una confrontación indirecta entre EEUU e Irán, principalmente en Iraq y Siria. Entre ellos, ataques estadounidenses contra milicias respaldadas por Teherán en ambos países y ofensivas contra objetivos estadounidenses en Iraq de los que se acusó

42. Human Rights Watch, “Iran: Events of 2021”, *HRW World Report 2022*, 2022.

43. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

44. Véase el resumen sobre Irán (nuclear) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

a Irán. **Durante 2021 también se observaron acciones de sabotaje contra instalaciones nucleares iraníes, en concreto contra las de Natanz (abril) y Buser (junio), en hechos que fueron atribuidos a Israel.** También contribuyó a enrarecer el ambiente la continua denuncia de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) por los incumplimientos por parte de las autoridades iraníes en lo que respecta a su programa nuclear. El organismo alertó sobre diversas actividades llevadas a cabo por Teherán, incluyendo el enriquecimiento de uranio al 20% –por sobre lo estipulado y a un nivel similar a los que tenía antes de suscribir el pacto–, la realización de actividades de producción de uranio que estaban prohibidas hasta 2031 o el acopio de uranio enriquecido a unos niveles 14 veces superiores a lo estipulado en el acuerdo de 2015. La AIEA también llamó la atención sobre las dificultades para acceder y supervisar algunas instalaciones nucleares. Al finalizar el año, ante la posibilidad de que se activara una censura de la AIEA a Irán, la agencia y las autoridades de Teherán llegaron a un acuerdo para restablecer las cámaras de vigilancia en unas instalaciones clave (Karaj).

En este contexto, **tanto los países europeos implicados en las negociaciones como EEUU manifestaron su preocupación por las actividades asociadas al programa atómico iraní y advirtieron sobre medidas de represalia si persistía el impasse negociador.** Tras cinco meses de bloqueo, las negociaciones se reemprendieron a finales de noviembre en Viena (séptima ronda), aunque sin arrojar avances. Después de que Teherán exigiera el levantamiento de algunas sanciones impuestas por el Gobierno de Joe Biden no vinculadas al programa nuclear, tanto EEUU como países occidentales advirtieron que abandonarían el diálogo. En medio de las presiones de Rusia y China, Irán accedió a retomar las negociaciones a partir de lo acordado en la ronda anterior. A finales de diciembre tuvo lugar una nueva ronda (la octava), aunque en paralelo Irán realizó pruebas con misiles, aviones no tripulados y aparatos espaciales que generaron suspicacias y críticas por parte de gobiernos occidentales.

## Mashreq

Egipto	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Gobierno Interna
<b>Actores:</b>	Gobierno, oposición política y social
<b>Síntesis:</b>	En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas,

Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

**Durante 2021, el Gobierno egipcio continuó siendo señalado por la persecución a la disidencia y múltiples violaciones a los derechos humanos.** Organizaciones internacionales, expertos de Naciones Unidas y terceros países alertaron sobre la situación en el país, destacando diversos abusos y vulneraciones como el arresto arbitrario de decenas de activistas, torturas y malos tratos de personas detenidas, intimidaciones a familiares de disidentes, uso abusivo de cortes militares para juzgar a opositores y severas restricciones impuestas a las ONG, entre otras prácticas. Amnistía Internacional acusó a la Agencia de Seguridad Nacional de acoso y amenazas a personas defensoras de los derechos humanos para silenciarlas y denunció las condenas a periodistas acusados de difundir noticias falsas por publicaciones críticas con la situación en las prisiones o la gestión de la pandemia, entre otros temas.<sup>45</sup> Expertas de Naciones Unidas también alertaron sobre torturas, detenciones y arrestos de defensores de derechos humanos en Egipto, subrayando que las prolongadas detenciones prejudiciales suponían una exposición grave e innecesaria a la COVID-19.<sup>46</sup> Organizaciones de derechos humanos también insistieron en las denuncias relativas a ejecuciones extrajudiciales de presuntos terroristas. Un informe de Human Rights Watch alertó sobre el asesinato de supuestos combatientes cuando permanecían en custodia o no suponían una amenaza. El Gobierno informó de la muerte de 755 personas en 143 presuntos tiroteos entre enero de 2015 y diciembre de 2020, pero solo identificó a 144. Según las autoridades, todas las personas fallecidas estaban en búsqueda por terrorismo, la mayoría tenía vínculos con los Hermanos Musulmanes –organización ilegalizada y duramente perseguida desde el golpe de 2013– y en todos los casos se informó que las fuerzas de seguridad habían respondido al fuego iniciado por los militantes. Sin embargo, HRW, que en 2020 ya había

45. Amnesty International, *Egypt: “This will only end when you die”: National Security Agency harassment of activists in Egypt*, 16 de septiembre 2021.

46. UN OHCHR, *Imprisoned human rights defenders in Egypt at grave risk of COVID-19, say UN human rights experts*, 24 de agosto 2021.

documentado ejecuciones extrajudiciales en el Sinaí,<sup>47</sup> en 2021 analizó varios casos ocurridos en el resto del país y en todos ellos había indicios de detenciones o desapariciones forzadas de las personas fallecidas previas a su muerte.

En este contexto, en marzo se aprobó una poco usual declaración internacional crítica con Egipto. **En el marco de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 31 Estados –incluyendo países como EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania– suscribieron una declaración conjunta en la que expresaron su profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Egipto.**<sup>48</sup> Se denunció de manera especial las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, la limitación del espacio de acción para la sociedad civil y la aplicación de normas antiterroristas contra voces críticas –incluyendo activistas por los derechos humanos, personas LGTBI y periodistas– y se hizo un llamamiento a revertir estas prácticas. No obstante, cabe destacar que muchos de los países suscriptores de la declaración mantuvieron sus relaciones de cooperación con El Cairo. Así, en 2021, el nuevo Gobierno de EEUU decidió suspender solo parcialmente la ayuda militar a Egipto y transfirió 170 millones de dólares para actividades de contraterrorismo, control de fronteras y no proliferación. Si bien otros 130 millones quedaron bloqueados a la espera de requerimientos en materia de derechos humanos, activistas criticaron la medida que consideraron más simbólica que sustantiva. En aparente respuesta a las presiones de Washington, el Gobierno adoptó algunas medidas, como la excarcelación de algunos periodistas (abril). En paralelo, no obstante, cortes egipcias ratificaron condenas de por vida a dirigentes de los Hermanos Musulmanes, el Parlamento discutió una norma que permite remover de sus cargos a funcionarios públicos sospechosos de simpatizar con el grupo islamista –una medida calificada de persecución por diversas ONG– y el presidente aprobó un decreto que permite a la Corte Suprema Constitucional decidir la aplicabilidad de acuerdos internacionales en Egipto, lo que podría permitir que el país evadiera sus compromisos en materia de derechos humanos.

Israel – Siria – Líbano	
<b>Intensidad:</b>	3
<b>Evolución:</b>	=
<b>Tipología:</b>	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
<b>Actores:</b>	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán, EEUU

### Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión de décadas entre Israel, Siria y Líbano –que en los últimos años se ha visto influida por el conflicto armado en Siria y ha contado con una implicación crecientemente destacada de Irán y EEUU– continuó motivando periódicos hechos de violencia. El balance de víctimas es complejo de precisar dadas las informaciones ambiguas sobre el impacto de algunos incidentes en términos de letalidad y por las dificultades para atribuir la autoría de algunos ataques, no siempre reivindicados. Aun así, a partir de recuentos basados en diferentes hechos de violencia identificados, es posible señalar que al menos 40 personas habrían fallecido. Como en años previos, **a lo largo de 2021 se informó de ofensivas israelíes en territorio sirio que tuvieron como objetivo fuerzas vinculadas a Irán y que también habrían provocado bajas en fuerzas gubernamentales, milicianos de Hezbollah y algunos civiles.** Israel también atacó las baterías de misiles sirias en abril, después de que un proyectil “errante” procedente de Siria cayera cerca de la instalación nuclear israelí de Dimona, y lanzó ofensivas contra depósitos de armas. Las incursiones aéreas atribuidas a Israel ocurrieron principalmente en las afueras de Damasco, Homs, Hama, Latakia, Quneitra, el Golán y Deir ez-Zor. En esta última región de Siria también se produjeron ataques estadounidenses contra milicias respaldadas por Irán, en represalia por ataques contra sus intereses en Iraq.<sup>49</sup> **En paralelo, a lo largo de 2021 se mantuvo la tensión en la zona fronteriza entre Líbano e Israel, en particular a lo largo de la Línea Azul, en el área supervisada por la Fuerza Interna de la ONU en Líbano, UNIIFIL.** En sus informes periódicos sobre la situación en la zona y sobre las actividades de la misión, el secretario general de la ONU constató diversos intercambios de proyectiles durante todo el año y alertó sobre el incremento de la tensión en algunos momentos, como por ejemplo en mayo, coincidiendo con la escalada de violencia en Gaza.<sup>50</sup> No se informó

47. Véase el resumen sobre Egipto (Sinaí) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

48. La declaración elaborada por Finlandia y publicada el 12 de marzo de 2021 contó con el apoyo de Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Holanda, Nueva Zelanda, Macedonia, Noruega, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y EEUU.

49. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

50. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 1 (Conflictos armados).

de víctimas mortales como resultado de estos hechos. Asimismo, la ONU reiteró las denuncias sobre las continuas violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel –más de 600 episodios hasta octubre de 2021–, el no desarme de grupos como Hezbollah y sobre transferencias a grupos armados no estatales en vulneración de la resolución 1701 (2006). A diferencia del año anterior, en que se celebraron varias reuniones, durante 2021 se informó solo de un encuentro (en mayo) entre representantes de los Gobiernos de Israel y Líbano para abordar las diferencias sobre la demarcación del límite marítimo, en el marco de discusiones mediadas por EEUU y auspiciadas por la Oficina del Coordinador Especial para Líbano de Naciones Unidas.

Líbano	
<b>Intensidad:</b>	2
<b>Evolución:</b>	↑
<b>Tipología:</b>	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
<b>Actores:</b>	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham

#### Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

**La situación en Líbano continuó deteriorándose en 2021 a causa del persistente bloqueo político, una retórica progresivamente hostil entre los diferentes actores, un gravísimo declive económico y diversos hechos de violencia.** Durante el primer semestre continuaron las tensiones y desacuerdos entre el primer ministro Saad Hariri y el presidente Michel Aoun sobre la formación de gobierno, sin que consiguiera aprobarse un gabinete a pesar de los intentos de facilitación y las presiones internacionales, en especial de Francia. Hariri acabó renunciando en julio, tras nueve meses de infructuosos esfuerzos por formar gobierno, en un contexto de acusaciones cruzadas con Aoun. Hariri señaló que el presidente, líder de la comunidad cristiano-maronita y aliado de Hezbollah, estaba secuestrado por los intereses de su yerno

Jibril Bassil, líder del partido cristiano Free Patriotic Movement. Mientras, Aoun acusó a Hariri, líder de la comunidad suní, de evasión de responsabilidades. El Parlamento designó entonces al multimillonario y Najib Mikati como nuevo primer ministro, quien negoció la composición del nuevo gobierno con Aoun. El nuevo gabinete –de 24 miembros, con solo una mujer como ministra– tomó posesión en septiembre, en lo que parecía el fin del impasse desde la dimisión del ex primer ministro Hassan Diab tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. Sin embargo, el panorama político volvió a tensionarse a las pocas semanas, en octubre, debido a las diferencias entre los diferentes actores políticos en torno a la investigación de la deflagración en la capital libanesa. Las reticencias sobre la marcha de la investigación y el desacuerdo con algunas medidas adoptadas por el juez investigador, Tariq Bitar, provocaron que organizaciones como Hezbollah, Amal y el Movimiento Marada exigieran la dimisión del magistrado, en medio de acusaciones de politización. Los ministros shiíes del Gobierno amenazaron con dimitir si el magistrado no era cesado de su cargo. Hasta finales de año las reuniones de gabinete permanecían suspendidas. **La disputa por la investigación judicial también motivó en octubre protestas de Amal y Hezbollah ante el Palacio de Justicia, ubicado en un barrio cristiano adyacente a una zona shií, que derivaron en varias horas de enfrentamientos armados en los que murieron siete personas, en su mayoría seguidores de Hezbollah, y otras 30 resultaron heridas.** El episodio, que trajo a la memoria la guerra civil en el país (1975-1990), no fue el único hecho de violencia política y sectaria. En febrero, el asesinato de un activista shií crítico con Hezbollah, Lokman Slim, también alentó temores sobre el retorno de los asesinatos políticos. Otros choques sectarios vinculados a la venganza por el asesinato de un adolescente durante choques entre Hezbollah y grupos suníes en 2020 provocaron la muerte de otras seis personas en agosto. Las manifestaciones de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut en demanda de justicia también derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Este contexto de inestabilidad política e incidentes de seguridad se produjo en paralelo a un grave deterioro de la situación económica en el país. El Banco Mundial señaló que la crisis en Líbano era una de las más graves de la historia moderna y acusó a las autoridades de favorecer la depresión económica con su inacción. Al finalizar el año el valor de la libra libanesa había perdido el 90% de su valor respecto a octubre de 2019 y seguía cayendo. Más de la mitad de la población vivía bajo la línea de pobreza. Las medidas de recorte de los subsidios a productos básicos y medicamentos y el aumento del precio del combustible impactaron en la crítica situación de la población, afectada también por la COVID-19. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron que el 80% de la población no tenía acceso a derechos básicos como salud, educación o

vivienda adecuada. UNICEF también advirtió sobre el dramático deterioro de las condiciones de vida y las afectaciones para niños y niñas y el Programa Mundial de los Alimentos alertó sobre los altos niveles de inseguridad alimentaria en el país, que afectaba al 22% de la población libanesa, al 50% de la población refugiada siria y al 33% de la población refugiada de otras nacionalidades en Líbano. A partir del segundo semestre la falta de suministro de combustibles provocó cortes de electricidad de hasta 23 horas diarias. Así, **se produjeron periódicas manifestaciones por la crisis política y social durante todo 2021. Las protestas se concentraron en Beirut, Trípoli y Sidón y en ocasiones derivaron en choques con las fuerzas de seguridad** que dejaron centenares de personas heridas y al menos dos fallecidas en numerosos incidentes. También se produjeron incidentes y altercados –algunos entre residentes de barrios shííes y cristianos– en torno a

estaciones de combustible que dejaron más de un centenar de personas heridas y numerosas fallecidas y que motivaron intervenciones de las fuerzas de seguridad. En agosto, incidentes en la zona de Akkar (norte) en torno a un depósito de combustible derivaron en una explosión que causó la muerte de 36 personas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también alertaron sobre abusos de las fuerzas de seguridad, incluyendo torturas y desapariciones forzadas de manifestantes y abusos contra población refugiada siria. Algunos análisis subrayaron que la situación interna en el país también se veía condicionada por las disputas a nivel regional –principalmente entre Irán e Israel y Arabia Saudita– y expresaron dudas sobre la voluntad o capacidad de las actuales élites libanesas para sortear la crítica coyuntura que afronta el país. A lo largo de 2021 también se produjeron algunos incidentes producto de la tensión con Israel.<sup>51</sup>

---

51. Véase el resumen sobre Israel-Siria-Líbano en este capítulo.